

# *HACIA UNA JUSTICIA EFICIENTE*

Diagnóstico  
22 Proyectos de Ley

3

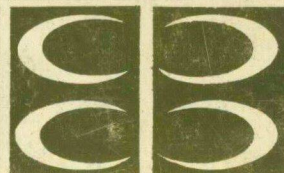
DOCUMENTOS

353.4  
C17h  
ej.1

06631

BIA EFICIENTE" - Comité Interinstitucional:

ENALGO - SAC - CAMACOL - FEDEMETAL - ACOPI - CAMARA  
ERCIO DE BOGOTA.









CCB-88

Biblioteca - CIEB-

No. Inventario no 6631Fecha Ingreso 16/10/96

DIA MES AÑO

Precio \$ 2.002 No. Ejemplares 12

Centro de Inquiries

# Indice

<b>PRESENTACION</b> .....	1
<b>I. DIAGNOSTICO</b> .....	7
<b>II. RECOMENDACIONES</b> .....	15
<b>1. REFORMA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> .....	18
- Auxiliares de la justicia .....	20
- Sistema nacional de informática jurídica .....	21
- Informática de gestión judicial .....	22
- PROYECTO DE LEY No. 1, por la cual se dictan normas sobre administración y finanzas de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, se reorganiza el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República y se expiden otras disposiciones .....	23
<b>2. DESJURISDICCIONALIZACION</b> .....	28
- Descriminalización .....	28
- Cheques sin provisión de fondos .....	30
- Delitos contra el patrimonio económico .....	31
- Violación de domicilio .....	32
- PROYECTO DE LEY No. 3, por la cual se dictan disposiciones sobre cheques .....	33
- PROYECTO DE LEY No. 4, por la cual se modifica el Código Penal .....	34
- Asignación de trámites a los notarios .....	34
- PROYECTO DE LEY No. 5, por la cual se establece la liquidación notarial de las sucesiones y se dictan otras disposiciones .....	36
- PROYECTO DE LEY No. 6, por la cual se regula el régimen de la adopción entre personas capaces .....	38
- PROYECTO DE LEY No. 7, por la cual se dictan unas disposiciones sobre registro del estado civil .....	39
- PROYECTO DE LEY No. 8, por la cual se atribuye a los notarios competencia para practicar pruebas anticipadas .....	40
- PROYECTO DE LEY No. 9, por la cual se autoriza la separación consensual de cuerpos mediante trámite notarial y se modifica el régimen de la separación judicial de cuerpos de matrimonios civiles .....	40



— PROYECTO DE LEY No. 10, por la cual se establece la celebración de matrimonio civil ante notario . . . . .	42
— PROYECTO DE LEY No. 11, por la cual se establece la conciliación en algunos procesos civiles . . . . .	43
— Convenio privado entre comerciantes . . . . .	43
— PROYECTO DE LEY No. 12, por la cual se establece el convenio privado entre comerciantes . . . . .	44
3. ARBITRAJE . . . . .	48
— PROYECTO DE LEY No. 13, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre procedimiento arbitral . . . . .	49
— PROYECTO DE LEY No. 14, por la cual se dictan disposiciones sobre arbitraje en los contratos de arrendamiento . . . . .	52
4. RACIONALIZACION DE GESTIONES POR Y ANTE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA . . . . .	54
— Presentación personal de escritos . . . . .	54
— PROYECTO DE LEY No. 15, por la cual se reforman algunas disposiciones del Código de Procedimiento Civil y se dictan otras disposiciones . . . . .	55
— Notificaciones . . . . .	56
— Hora judicial . . . . .	56
— Condena en concreto . . . . .	57
— Perención . . . . .	57
— PROYECTO DE LEY No. 16, por la cual se modifican algunas disposiciones del Código de Procedimiento Civil . . . . .	58
— PROYECTO DE LEY No. 17, por la cual se adiciona una norma del Código de Procedimiento Civil y se dicta otra disposición . . . . .	61
— PROYECTO DE LEY No. 18, por la cual se regula parcialmente la forma de las providencias judiciales . . . . .	62
— PROYECTO DE LEY No. 19, por la cual se modifica una norma del proceso laboral . . . . .	63
— PROYECTO DE LEY No. 20, por la cual se dicta una disposición sobre pago por consignación en materia laboral . . . . .	64
— Expropiación . . . . .	65
— PROYECTO DE LEY No. 21, por la cual se asigna la competencia para conocer del proceso de expropiación y se dictan algunas disposiciones sobre su procedimiento . . . . .	66
— Concordato . . . . .	67
— PROYECTO DE LEY No. 22, por la cual se adicionan unas normas sobre concordato preventivo . . . . .	67



# PRESENTACION







*"El poder judicial contiene la medida del bien o del mal de los ciudadanos; y si hay libertad, si hay justicia en la república, son distribuidas por este poder".*

SIMON BOLIVAR

*El presente documento recoge las principales conclusiones y recomendaciones de un capítulo del programa "COLOMBIA EFICIENTE", que desde finales de 1984 adelantan la Cámara de Comercio de Bogotá y los principales gremios de la producción del país, ANDI, FENALCO, SAC, CAMACOL, FEDEMETAL y ACOPI. A través del mismo nos dimos a la tarea de hacer una averiguación objetiva y serena de la administración del Estado, para detectar en lo posible los factores que impiden la eficiencia en la gestión pública y proponer mecanismos que estén orientados a superarlos.*

*Luego de dos años de labor y de estudiar un buen número de dependencias estatales, hemos advertido, por comprobación, que la Nación adolece de profundas fallas en su gestión, particularmente determinadas por el formalismo, el legalismo, los numerosos y complicados trámites: es un fenómeno de carácter estructural que, en gran medida, ha modelado o diseñado imperceptiblemente al servidor público que se ciñe a lo formal, al requisito, a lo literal de las normas, con lo cual se ha adquirido o aumentado el hábito de exigir y exigir documentos, sellos, comprobaciones, con un solo resultado: el entramamiento de la gestión de los gobernados ante el Estado y la desesperanza de aquéllos en medio de la impotencia.*

*Por la dimensión de la problemática de la administración de justicia, hemos considerado prioritario presentar el trabajo de conclusiones y recomendaciones en este sector.*

*El país ha ido sumando diagnósticos sobre la crisis de la justicia que ahora permiten su cuantificación en cifras, cifras que producen alarma y angustia y que van extendiendo una sensación de impotencia y de resignación hasta el punto de que la magnitud misma del problema desalienta a quienes tienen en sus manos el poder de decisión, para prestar y poner en marcha soluciones concretas. Así ha sucedido en las últimas épocas dejando que el simple transcurso del tiempo o la acción de futuros gobernantes remedien el problema de la justicia.*

*Los diagnósticos hasta ahora realizados permiten afirmar que, sumados los negocios de la rama civil y de la rama penal, existen en los juzgados de la república cerca de tres millones de procesos que, en definitiva, nunca podrán ser resueltos mientras que, año tras año, se agregan nuevos procesos en número superior a la reducida capacidad de tramitación y solución del sistema, produciendo el "empantanamiento" de la administración de justicia que, simple y llanamente, ha dejado de operar en la práctica.*



Renunciamos a formar parte del coro de quienes simplemente se limitan a repetir las cifras y los porcentajes que acreditan la crisis de la justicia, sin hacer ni proponer nada que se encamine a solucionarla. Por ello desde hace algún tiempo venimos coordinando la acción de las entidades del sector privado en un esfuerzo que trascienda la fácil tentación de repetir diagnósticos y que transforme en acciones y propuestas concretas las sugerencias para obtener mejoras sustanciales en los distintos aspectos de la administración de justicia.

Hemos ejecutado, en coordinación con el Instituto SER, programas de sistematización, con efectos demostrativos, en un juzgado del Circuito de Bogotá, con resultados halagadores que desde ya permitirían extender, si se quisiera, los resultados de esta experiencia. Hemos iniciado en coordinación con el Ministerio de Justicia el funcionamiento de la ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL, a sabiendas de la inexistencia de recursos económicos, pero convencidos de que el esfuerzo conjunto nos permite ir avanzando entre tanto, con imaginación y deseo de servicio, en la capacitación de los jueces de la república, como en efecto lo hemos hecho, a la espera de que las aspiraciones de mejoramiento de la justicia superen al fin los planteamientos literarios para quedar respaldadas con partidas presupuestales suficientes. Y hemos coordinado en Bogotá los esfuerzos de la policía y de los jueces municipales y de instrucción criminal en un intento colectivo y solidario para RECONQUISTAR LA SEGURIDAD de la Capital.

Para lograr una "COLOMBIA EFICIENTE" en materia de administración de justicia debemos acudir a alternativas de reforma que trasciendan de las soluciones formales o nominales, como quiera que las propuestas tradicionales han demostrado su inoperancia. En efecto, en el pasado se han ejecutado sin mayores resultados, reformas integrales a las leyes de procedimiento, incremento de jueces para resolver la congestión y la modificación en las competencias. La primera fórmula tiene suficientemente comprobada su ineficacia. Parece ser que la segunda solución planteada es inoperante: aumentar 100 ó 200 jueces es inútil si se tiene en cuenta que en el país hay 4.000 jueces. En 1980 se expidió la Ley 22, de "Emergencia Judicial", con la que se pretendió resolver el problema penal creando 767 Juzgados Auxiliares (Decreto 3529/80) que le costaron al Estado cerca de \$600 millones de pesos; al finalizar esta experiencia no solamente se gastaron los recursos señalados, sino que los negocios en trámite se aumentaron en un número de 150.000. Por otra parte, luego de la redefinición de competencias mediante la Ley 22 de 1977, no se produjo una descongestión en los procesos existentes a la fecha.

Distintas entidades públicas y privadas, magistrados, académicos, litigantes, etc., han venido diseñando fórmulas de solución al problema de la crisis de la administración de justicia, cuya implantación conviene acometer de inmediato, para prohiar todas aquellas alternativas que en una u otra forma habrán de redundar en el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. Algunas de ellas, las más importantes, y aquellas que apenas inician el riguroso camino del examen público, se compendian en este documento para promover su debate amplio y su adopción por el Congreso de la República.

Las propuestas dicen relación con la autonomía administrativa y el fortalecimiento fi-



nanciero de la justicia; el establecimiento de un sólido y coordinado programa de sistematización que comprenda la informática jurídica y la informática de la gestión judicial; la descriminalización de algunas conductas para que la justicia penal no siga al servicio de la cobranza de simples obligaciones mercantiles; la desjurisdiccionalización de determinados trámites, eliminando la intervención judicial en casos en que, por su naturaleza, bastaría la actuación policiva o el simple acuerdo de voluntades; la posibilidad de cumplir ante los Notarios parte de las diligencias que hoy ocupan la atención de los jueces como la práctica de pruebas anticipadas o el trámite de sucesiones no contenciosas; la eliminación de ritualidades y formalidades excesivas que so pretexto de garantizar la comparecencia de las partes, se han convertido en barreras para la resolución de los conflictos que se someten al conocimiento de los jueces y el cambio de las formas procesales para tramitar por la vía del proceso verbal situaciones que no demandan mayor debate probatorio.

Mediante este estudio confiamos estar cumpliendo con la tarea de aportar soluciones concretas en beneficio de la recuperación de la justicia en Colombia, convencidos como estamos, de que en este país de leyes, nos hemos ido acostumbrado al diletantismo jurídico, mientras se aleja la posibilidad de tener la pronta y cumplida justicia que sólo ha quedado como motivo de discursos y promesas frecuentemente repetidas y casi nunca cumplidas.

Este documento, fundado en los más diversos y profundos análisis, que forman parte de la biblioteca de COLOMBIA EFICIENTE y que por razones de espacio no se publican, ha sido concebido con la mayor objetividad, tratando de encontrar soluciones que abran el camino a un mejor estar de nuestro país y brindar a todos la seguridad jurídica que hoy tanto se echa de menos. No hemos escatimado esfuerzos para tratar de lograr unos textos que consulten tanto la conveniencia ciudadana como las estructuras institucionales consagradas en la Constitución Política. El trabajo no tiene —en absoluto— la pretensión de una panacea y el sector privado no reclama su total autoría por cuanto se han tomado, como ya se expresó, viejos diagnósticos y sugerencias y fórmulas planteadas por estudiosos del derecho e ilustres juristas que han hecho sentir también su preocupación por el tema. Se aspira sí a abrir por lo menos una amplia discusión nacional a la que confiamos se vinculen todos los colombianos, pero particularmente los magistrados, jueces y los abogados litigantes como protagonistas centrales del quehacer diario de la justicia. Queda abierta, pues, la discusión sobre estas iniciativas, que en modo alguno consideramos definitivas e inmejorables.

Finalmente, rindo testimonio de gratitud a las personas con cuya inteligencia fue posible culminar este esfuerzo. Son ellos los doctores Alfonso Charria Angulo y Miguel Botía Posse, cuya labor fue dirigida y orientada por el Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Néstor Humberto Martínez Neira.

MARIO SUAREZ MELO  
Presidente Ejecutivo







# I. DIAGNOSTICO







En Colombia existe la convicción de que hay una verdadera “crisis de justicia” sin que el ciudadano raso, que no confía en ella, sepa explicar sus causas. Las personas que la administran son miradas con desconfianza y los procedimientos que emplean como simples medios de “enredar” la justicia y hacer eternos los trámites. Otros enfocan el problema hacia el aspecto presupuestal.

Los problemas son múltiples, pero debe destacarse que muchos de ellos se solucionarían con una mejor estructuración de la Rama Jurisdiccional, con técnico manejo de su presupuesto y con la implementación de elementos modernos que agilizaran los procesos y permitieran su eficiente control.

De manera general la administración de justicia comprende un conjunto de actuaciones procesales ante tribunales competentes, dirigida a resolver conflictos mediante fallos en derecho y la mayor parte de ellos con carácter de cosa juzgada. Este es sin embargo, un contenido parcial pues esa administración cubre también otra serie de aspectos que corresponden desde la función puramente notarial hasta actividades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en favor de los menores y de la familia. Y además supone, internamente, una infraestructura de orden material y presupuestal que permita su funcionamiento eficaz y oportuno en términos de tanta necesidad que frecuentemente la función jurisdiccional se ve limitada por insuficiencia de elementos técnicos o instrumentales para su correcto desenvolvimiento.

Distinguir entre esos aspectos, los que atañen al contenido mismo de la función jurisdiccional y la colaboración de la administración al respecto, y aquéllos de orden técnico o instrumental, permite comprender en su real magnitud el orden de soluciones que la administración de justicia necesita para mejorar su rapidez y eficiencia.

Como se ha dicho la justicia colombiana está “sobrediagnosticada” en sus males, y aun en los remedios; pero nada positivo se ha logrado para mejorarla dentro de los esfuerzos anteriores.

El desarrollo de la actividad privada resulta lesionado cuando el marco jurídico que ordena las



conductas en interferencia no logra su cumplida ejecución, por virtud de la crisis en la administración de justicia. Por tal motivo, debe propenderse por la realización eficiente de los derechos de los particulares, a través de la optimización de los recursos con que cuenta nuestra administración de justicia en todos los niveles. Los mayores flagelos de aquella están determinados por la lentitud de los procesos judiciales, la ausencia de capacitación de los jueces y la carencia de recursos y de una adecuada infraestructura administrativa para su funcionamiento.

### Morosidad de la justicia

Se ha dicho que la justicia lenta es por antonomasia la mayor de las injusticias. Es por ello que deben diseñarse estrategias que, a través de la racionalización de los recursos existentes, signifiquen un comportamiento diferente de los términos de duración de los procesos. En el trabajo “Diagnóstico de la Justicia Civil y Laboral en Colombia”, elaborado por el Instituto Ser de Investigaciones y presentado en el mes de julio de 1984 al Ministro de Justicia, se lee de qué manera *un proceso laboral ordinario en Colombia demora más de 3.5 años y cómo para 1984, a 31 de diciembre, según la tendencia de crecimiento de los negocios que se tramitan ante la justicia, debían existir represados 1.574.546 juicios, lo que significa que su evacuación requeriría cerrar las puertas de los juzgados por más de siete años —sin recibir un negocio más—*, para que pudiesen despachar la totalidad de procesos que en la fecha congestionan los despachos judiciales.

A su turno, el inventario más reciente de asuntos penales pendientes (a junio de 1982), indica la existencia de 1.397.800 negocios represados; cifra que representa un incremento del 84% en once años y un aumento anual promedio del 7.7%. Según las investigaciones a los juzgados penales entran anualmente tres o cuatro veces más negocios de los que salen. De esta manera, se señala como término máximo para “poner al día” la justicia penal, un período de diez años; en Bogotá sería necesario aumentar la eficiencia del sistema 3.1 veces; en Barranquilla 11.8 veces; en Cali 4.4 veces y en el resto del país 3.4 veces. (Juicio y Reforma — JUSTICIA PENAL — Contraloría General de la República y Fescol. Bogotá 1983).

### Idoneidad de los jueces

A pesar de hallarse formalmente creada, no funciona en Colombia una escuela de capacitación judicial que procure la realización de estudios continuados por parte de los titulares de la función jurisdiccional. Así, es posible que no contemos con los más calificados profesionales para solucionar en derecho las controversias y conflictos que surgen diariamente. La Cámara de Comercio de Bogotá, a través del estudio “La Jurisdicción Especial del Comercio: Elementos Históricos y Estadísticos para una Propuesta”, ha comprobado, entre otros factores, que *el 49% de los jueces civiles de Bogotá no ha realizado cursos de actualización*, al paso que ninguno de ellos realizó un curso académico sobre el Nuevo Código de Comercio a partir de su



vigencia, lo cual es ciertamente representativo de la carencia de una infraestructura que vele por el permanente estudio e investigación de nuestros jueces.

### Infraestructura Administrativa

La función jurisdiccional se desarrolla por una de las tres ramas del poder público. Sin embargo, en el ejercicio de sus labores la Rama Jurisdiccional carece de autonomía administrativa y financiera, de manera que su desarrollo depende de la logística que le facilita el ejecutivo —Ministerio de Justicia— Fondo Rotatorio. Un diagnóstico preliminar efectuado por el Departamento Nacional de Planeación sobre la eficiencia gubernamental en estas materias, formula un inventario de los siguientes problemas:

1. Organización administrativa inadecuada.
2. Diversidad en las políticas de gestión.
3. Diversidad de criterios en los ordenadores del gasto. (Medicina Legal, Fondo Rotatorio, Ministerio de Justicia, Dirección de Prisiones).
4. Excesiva autonomía de Medicina Legal (más explicable dicha autonomía por el tipo de funciones que desarrolla).
5. Excesiva autonomía de la Dirección de Prisiones (no hay elementos de juicio para establecer si ello es conveniente).
6. No hay claridad en la asignación de funciones en el interior del Ministerio.
7. Concentración excesiva de los funcionarios técnicos en las áreas del derecho y de la medicina. No hay posibilidad de enfoques interdisciplinarios.
8. Ausencia de programación de la inversión.
9. El 80% de la contratación que hace el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia se hace en forma directa, con recargos excesivos frente a otras alternativas (este punto no se ha comprobado en el Fondo).
10. Incapacidad del Fondo Rotatorio para invertir lo presupuestado.
11. Los contratistas del Fondo no son los más calificados, y parece existir una excesiva concentración de los contratos en unos pocos.



12. Ni planeación, ni el Ministerio, ni Contraloría han realizado un control de gestión.
13. No hay criterio sobre inversiones prioritarias.
14. La política de “palacios de justicia” ha llevado al diseño exagerado de obras faraónicas, más en función de logros ministeriales personales que de necesidades reales. Se citan como ejemplo el caso del Huila (palacio de justicia de Neiva); el del Valle del Cauca, cuyo diseño inicial en cimientos y estructuras era para más del triple del edificio levantado finalmente; y excesos de inversión en departamentos pobres que debían dar prioridad a otras obras y no a cárceles.
15. Absoluta autonomía de la Superintendencia de Notariado y Registro y de su Fondo, no obstante estar adscritos al Ministerio de Justicia.
16. El Ministerio de Justicia cuenta con 7.223 funcionarios, distribuidos así: Directivo: 3, Asesor: 2; Ejecutivo: 15; Profesional: 555; Técnico: 321; Administrativo: 5.789; Operativo: 538. No se ve muy clara la justificación del volumen de empleados.
17. La Dirección General de Prisiones tiene a su cargo 186 establecimientos carcelarios que albergan 25.584 presos, laborando 6.024 funcionarios. No hay suficientes elementos de juicio para establecer si la proporción es razonable.
18. El Ministerio tiene 29 seccionales de Medicina Legal, con 329 funcionarios (parece una relación razonable).
19. Con 47 empleados la División de Asistencia de la Rama Jurisdiccional coordina 17.214 funcionarios distribuidos en 3.529 juzgados.

Al concluir el Departamento Nacional de Planeación en su documento “ESTUDIO SOBRE LAS FINANZAS DEL SECTOR SOCIAL — EL SECTOR DE LA JUSTICIA y LA SEGURIDAD CIUDADANA”, que es “difícil dar un concepto favorable al manejo actual de la administración de justicia”, subraya como protuberantes inconvenientes:

1. La inexistencia de una política de inversión.
2. La inexistencia de controles a los mecanismos de contratación.
3. La ausencia de programación presupuestal.
4. La inexistencia de políticas claras en materias de capacitación de personal y de investigaciones sectoriales.



5. La ausencia de canales institucionales para concertar estrategias con organismos del sistema en su acepción más amplia, tales como la Rama Judicial, Procuraduría, DAS y demás organismos de seguridad, o con organismos externos al sistema, pero complementarios, como DANE, Ministerio de Comunicaciones, Planeación Nacional y Ministerio de Gobierno.
6. La falta de seguimiento de los programas del Fondo Rotatorio.
7. La repetición en los proyectos de presupuesto, de obras que deberían estar terminadas, de acuerdo con los recursos anteriormente asignados.

### Inspecciones de Policía

También en este campo se ha realizado una exhaustiva labor de diagnóstico sobre funcionamiento, de la cual se concluye que éstas no cumplen el objetivo para el cual fueron creadas y que los obstáculos que entorpecen su funcionamiento han desvirtuado su filosofía de actuar como instituciones preventivas. En ese trabajo investigativo del Instituto Ser-Cámara de Comercio de Bogotá, se advierten los siguientes datos, en verdad preocupantes:

Las dos terceras partes de una Inspección de Policía están copadas en la evacuación de despachos comisorios, en procesos ejecutivos o de lanzamiento; la práctica de un lanzamiento o la concreción de una medida cautelar en una Inspección de Policía, toma un término promedio de casi nueve meses; *el 84.5% de los negocios de las Inspecciones Penales de Policía quedan en etapa de investigación, aún en casos de flagrancia y confesión (el 17% de los mismos) y los procesos que están estancados en la etapa de investigación, provenientes de Juzgados, tienen una duración aproximada de 12.6 años y de permanencia en la Inspección de 4.0 años en promedio*, para citar tan sólo algunos casos del estado de ineficiencia de las Inspecciones de Policía.







## II. RECOMENDACIONES



### ACLARACION

En la página 33 se publica el "Proyecto de Ley Número 3, por la cual se dictan disposiciones sobre cheques", respecto a lo cual ANDI y FENALCO han dejado a salvo su opinión, manifestando que la adopción de una norma eliminando el carácter delictivo de los cheques sin fondos "podría traducirse en la proliferación de cheques rechazados, por carencia total o parcial de fondos, o por órdenes injustificadas de no pago y, de paso, en el deterioro de la confianza pública en un título valor que es fundamental para las transacciones comerciales".

Se incluye el proyecto de ley y la advertencia de ANDI y FENALCO para que el documento sirva de base a la discusión que, desde luego, habrá de adelantarse en torno a éste y a los demás proyectos, tratando de obtener el mayor número de opiniones y el mayor grado de acierto en beneficio de la comunidad.



Con la presentación de diversos textos de proyectos de ley, se pretende en este documento, como ya se anunció, proponer algunas fórmulas concretas que tal vez podrán dar salida a la problemática contenida en los siguientes aspectos:

- Reforma administrativa de la justicia, que contempla su propio manejo presupuestal, la reestructuración de la función de auxiliares de la justicia, el sistema nacional de informática jurídica, la informática de gestión judicial.

Desjurisdiccionalización, que comprende la descriminalización o despenalización de determinadas conductas, asignación de trámites a los notarios, obligatorio intento de conciliación judicial, convenio privado entre comerciantes.

- Arbitraje. Agilización de trámites.
- Racionalización de gestiones por y ante la administración de justicia, que contempla presentación personal de escritos, notificaciones, hora judicial, condena en concreto, perención, forma de las providencias judiciales, pruebas laborales, pago por consignación de acreencias laborales, expropiación y concordato.



# 1. Reforma administrativa de la justicia

## Independencia administrativa y financiera:

Dentro de la notable evolución del aparato estatal iniciada en los años sesenta y orientada a adoptar los sistemas de gestión administrativa planteados por los tratadistas y adoptados por los países más desarrollados y simultáneamente a modernizar los equipos que hicieran más eficiente la actividad de los funcionarios públicos, el poder judicial colombiano quedó absolutamente



aislado. Puede afirmarse que los despachos judiciales funcionan, en general, con equipos y procedimientos adoptados al inicio de la tercera década del presente siglo.

La noción de "Empresa" predicada de cada despacho judicial, no es una idea que pueda considerarse revolucionaria. Ya hace más de treinta años el "Chief Justice" Arthur Vanderbilt, había planteado dicho esquema y entre nosotros también se había recomendado una revisión del manejo de los despachos en la década anterior. (VANDERVILT, ARTHUR. La Justicia emplazada a reformarse. Roque De Palma, editor. Buenos Aires, 1959). De otro lado, toda actividad organizada y permanente requiere recursos materiales para realizar sus cometidos; es necesario elaborar presupuestos, balanceando ingresos con egresos, y administrar los mismos en orden a que las partidas destinadas a la inversión o funcionamiento, sean oportunamente recibidas y eficientemente utilizadas. Si cada despacho es una "microempresa" la Rama Jurisdiccional, en su conjunto, es una GRAN EMPRESA, grande no solamente por el número de empleados que en ella labora y por la cantidad de bienes y servicios a ella afectados, sino por los intangibles pero trascendentales bienes que "produce".

Pues bien, solo aquel que conoce la actividad que desarrolla su organización, puede manejarla, lo cual en parte esencial supone la determinación de las necesidades de la misma y la obtención y distribución de los recursos en forma racional y oportuna. Una reestructuración administrativa implica, en primer lugar, tener noción clara de la justicia, no ya en cuanto servicio público, sino como un conjunto de personas con funciones, horarios de trabajo, tareas a corto y largo plazo, con una distribución jerárquica muy precisa, etc. Si la función de los jueces (en sentido lato) es dictar decisiones que apliquen la ley al caso concreto, no es lógico dentro de una distribución coherente de funciones, que además deban atender otro grupo de aspectos de índole meramente administrativa: permisos, licencias, control disciplinario y de resultados. Parece más apropiado y a la vez más benéfico para una eficiente administración de justicia, que dichas funciones estén en cabeza de ciertos funcionarios, con tiempo y conocimientos dedicados exclusivamente a las actividades enunciadas.

En cuanto a la preparación de los jueces, en la universidad debe iniciarse la formación de quienes se sientan inclinados a la carrera judicial, estimulando todos aquellos temas específicos que miran hacia su adecuada instrucción para administrar justicia y, dentro de este esquema, establecer sistemas idóneos de ingreso a la base de la carrera, verdaderas oposiciones que permitan conseguir que los más idóneos entren al servicio. Pero allí no termina esta importante acción. El juez debe estar en permanente contacto con la ciencia jurídica y preparándose para sus posibles ascensos, los cuales deben fundamentarse en la eficiencia e idoneidad de los candidatos. Hoy se echa de menos una debida información sobre tales aspectos, que a veces impide la más adecuada selección de candidatos a tan importantes cargos. La labor docente, de control y de informática jurídica y de gestión, debe estar igualmente ubicada en la organización judicial.



Los problemas esquemáticamente expuestos podrían ser resueltos entregándole la gestión presupuestal a la propia rama jurisdiccional de manera que ésta cuente con los recursos técnicos y humanos para el manejo e inversión del presupuesto según las necesidades de la justicia en cada Distrito judicial.

Nuestro planteamiento es, concretamente, crear una entidad, con base en el actual Fondo Rotatorio, encargada de dirigir la gestión del presupuesto para la justicia; controlar la eficiencia de los funcionarios judiciales, elaborar estadísticas judiciales que sirvan como indicios para la elección de empleados de la rama jurisdiccional, dirigir la escuela judicial encargada de dictar periódicamente cursos de actualización a los jueces y cursos sobre servicio judicial a los estudiantes universitarios, etc. La suprema dirección de la misma se confía al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Tribunal Disciplinario, al Procurador General de la Nación y al Ministro de Justicia.

Este Instituto para la Administración de la Rama Jurisdiccional del Poder Público desarrollaría una importante función de soporte logístico a los despachos judiciales haciendo más eficiente ciertas labores que según se ha observado, entraban grandemente la buena marcha de los procesos. Tal es el caso de las diligencias de reparto que actualmente ocupa la justicia como mínimo el tiempo de trabajo de un juzgado tipo durante cada año. Problemas similares ocurren con las notificaciones. El arancel es exiguo e ineficientes las gestiones que para cada despacho realiza el funcionario denominado "notificador". Dentro de las dependencias del Instituto deberán crearse oficinas auxiliares de reparto y notificación, especialmente en las ciudades de mayor congestión en las cuales se centralizaran dichos servicios.

Para conseguir entre otros estos objetivos, se ha previsto en el proyecto el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente de la República para que en asocio de los presidentes de las altas corporaciones judiciales desarrolle toda una reforma de la administración de los despachos.

#### Auxiliares de la justicia:

Según el Diagnóstico de la Justicia Laboral y Civil en Colombia (Instituto SER de Investigación), en un 19% de los procesos con período probatorio se decretaron inspecciones judiciales, de las cuales el 76.9% requerían de un auxiliar de la justicia: la mitad no se posesionó, lo que obligó a reemplazarlos con consecuente demora en el recaudo de la prueba.

Los problemas relacionados con los auxiliares son: las listas continuamente se desactualizan o incluyen personas que no cumplen con los requisitos exigidos; las tarifas fijadas son anacrónicas y el juez debe estipular honorarios que no siempre se ajustan al valor comercial. No hay una sanción para el incumplimiento de los auxiliares pues la actualmente establecida en el artículo 11



del Código de Procedimiento Civil, no tiene suficiente fuerza compulsiva: muchas veces los auxiliares prefieren pagarla a cambio de no asistir a la inspección.

Existen también problemas con los secuestres, pues los elementos dados a su custodia generalmente se guardan en sitios inadecuados o se les da un uso que los deteriora. El juez no puede llevar un control estricto del manejo que hace dicho auxiliar de los bienes secuestrados.

Por otra parte, los defensores de oficio son también una de las causas de una deficiente justicia. Según los estudios de base, su labor se restringe a menos de un 2.2% en relación con el total de actuaciones realizadas a favor del sindicado durante la etapa del sumario, lo que demuestra su mínimo interés en defender la causa que les ha sido asignada.

La solución del problema debe buscarse en una centralización de todas las funciones relacionadas con creación de listas, designación de auxiliares, control de su gestión, sanciones y exclusiones. Esto para que el juez se libere de esa dispendiosa labor, dejando en manos de una oficina el control específico de la materia, dentro de un mejor criterio administrativo. Esta oficina podría también encargarse de vigilar la eficiencia de los defensores de oficio en los correspondientes procesos.

La Oficina de auxiliares debe asumir las funciones de elaborar las listas, designar los auxiliares, controlar su gestión, etc. La Oficina recibirá del juez un informe sobre el incumplimiento de los auxiliares por él requeridos y sancionar, mediante informe a la corporación profesional respectiva, la omisión del auxiliar. Igualmente, puede proceder a excluir los nombres de la lista y exigir el pago de una multa.

#### Sistema nacional de informática jurídica:

La centralización de la información en materia jurídica es uno de los objetivos que deben realizarse a corto plazo, para solucionar los problemas que hoy existen en torno a la difusión y utilización de documentos jurídicos. Actualmente esos problemas tienen incidencia en el nivel interno de la administración de justicia, pues no existe una documentación sistematizada a la cual puedan acudir los jueces, magistrados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional para obtener información sobre leyes, decretos y jurisprudencia. A nivel externo también se refleja el problema, pues la información está a cargo de distintas entidades (Diario Oficial, Anales del Congreso, Gaceta Judicial, Anales del Consejo de Estado), pero normalmente las ediciones son insuficientes o adolecen de errores y su consecución no es fácil. Si esto se relaciona dentro de un esquema tan excesivamente normativista como el nuestro, muy dado a derogar y decretar nuevas disposiciones en forma profusa, se puede valorar el resultado funesto que puede ocasionar una deficiente o atrasada información. Además y teniendo en cuenta la enorme cantidad de leyes, decretos y otras



disposiciones, el viejo sistema de consulta de diarios oficiales y libros no es el más óptimo metodológicamente.

La aplicación de la informática jurídica a los documentos legales corresponde a un criterio más moderno en materia de tratamiento del texto, estableciendo niveles de información de acuerdo con las necesidades del interesado. Esto se traduce en una mayor velocidad y eficacia de la información según los fines propuestos y en la posibilidad de centralizar una vasta información, permitiendo su almacenamiento y consulta a través del computador. Actualmente existen distintas entidades y corporaciones que desarrollan la sistematización de los documentos jurídicos. El Consejo de Estado, por ejemplo, adelanta la sistematización de la jurisprudencia allí consignada. Igual propósito tiene la Corte Suprema de Justicia, una vez se recopile la mayor cantidad posible de documentos destruidos. El Banco Popular y la Administración de Impuestos Nacionales, realizan la sistematización de la legislación tributaria y la Fundación Mariano Ospina Pérez posee una importante recopilación de leyes y decretos.

Nuestra propuesta se define en dos sentidos: centralización de toda información jurídica y aplicación a esta de la informática, de manera que su consulta sea más racional y esté guiada por elementos (descriptores) que la hagan más rápida y eficiente.

Debe crearse una sociedad de economía mixta que cuente con recursos suficientes para realizar esa labor. Las erogaciones que ello ocasione pueden recuperarse posteriormente con la venta de información al público. Puede pensarse también en que esta sociedad se encargue de suministrar a los despachos judiciales la información jurídica que estos soliciten.

### Informática de gestión judicial:

Uno de los factores que inciden notablemente en la congestión de la justicia es la falta de elementos modernos que sirvan de soporte a las labores del despacho y de secretaría. El volumen de expedientes, demandas, notificaciones, además de otras actuaciones como recepción de diligencias, información a los litigantes, etc., exigen una capacidad ilimitada de trabajo, la cual, de existir, es también insuficiente para mantener al día un juzgado. El origen de este problema debe mirarse de una parte en la cantidad de negocios que deben atender los juzgados, particularmente en las ciudades de mayor población y desarrollo. De otra parte, en el sistema con que actualmente se atienden los distintos negocios, el cual es obsoleto frente a la congestión enunciada. La sistematización de la administración de justicia debe ser acogida como la manera más efectiva de agilizar los trámites del juzgado, brindando los elementos técnicos para que éstos se realicen con rapidez y eficacia.

La implementación del computador actualmente se materializa en distintos proyectos y experimentos. Es necesario continuarlos y extenderlos para obtener mejores beneficios. Uno de



esos experimentos se realiza en el Juzgado 23 del Circuito Civil, el cual trabaja con un computador como soporte administrativo en dos áreas de trabajo: información y control de cada una de las actuaciones desarrolladas en los procesos, y edición de cada una de las actuaciones, con copia para secretaría y archivo. Los beneficios alcanzados son varios: el juzgado se encuentra totalmente al día y diariamente evacúa un buen número de autos, notificaciones y sentencias. Otro proyecto en tal sentido se realiza en la secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Mediante un computador, se controla la gestión de los procesos y las actuaciones de secretaría con notoria mejoría en la rapidez del servicio. Los resultados han sido ampliamente satisfactorios y permiten recomendar la instalación del proceso en todos los niveles de la justicia, con un sistema integrado de gestión administrativa.

El computador tendría la función de servir como instrumento de apoyo para, mediante la incorporación de cierta información básica, llevar el control y administración de procesos, registro de actuaciones en los mismos; mediante un editor de texto, producir las copias de la información requerida. Sus funciones cobijarían de una parte las labores de secretaría y algunas del despacho. El computador como apoyo a la tramitación de los procesos, podría consecuentemente permitir al fallador una visión más detallada y rápida del mismo, agilizando la labor misma de fallar.

Ahora bien, su implementación debe hacerse dentro de un cambio paulatino de la actual estructura de la justicia, con el objeto de que se adopte inicialmente en las ciudades que más problemas presentan en materia de administración de justicia, para finalmente instaurarse en todo el país. Para esto es preciso modificar la actual conformación de los juzgados buscando la posibilidad de que, mediante "grandes secretarías" para determinado número de juzgados, los beneficios del computador se aprovechen al máximo con menor costo. Este sistema tiene una aplicación similar en otros países y no derivaría en disminución de empleo.

En el PROYECTO DE LEY No. 1, que se copia a continuación, se hacen previsiones que recogen este aspecto de la REFORMA ADMINISTRATIVA DE LA JUSTICIA:

#### **PROYECTO DE LEY No. 1**

Por la cual se dictan normas sobre administración y finanzas de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, se reorganiza el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República y se expiden otras disposiciones.



## EL CONGRESO DE COLOMBIA

### DECRETA

**Artículo 1o.** — A partir de la vigencia presupuestal de 1987 la Rama Jurisdiccional del Poder Público gozará de autonomía e independencia para manejar su presupuesto, en los términos de que gozan actualmente los Ministerios y Departamentos Administrativos y con sujeción a las normas orgánicas del presupuesto.

**Artículo 2o.** — Para los efectos indicados en el artículo anterior, reorganizase el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia como entidad descentralizada de naturaleza especial del orden nacional, bajo el nombre de Instituto para la Administración de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, con domicilio en Bogotá D.E. y oficinas regionales en las ciudades donde existan Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

**Artículo 3o.** — Además de las funciones que actualmente cumple el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, el Instituto para la Administración de la Rama Jurisdiccional del Poder Público tendrá las siguientes:

- a) Preparar el proyecto anual de ingresos, inversiones y gastos de la Rama Jurisdiccional, así como el del propio Instituto, para por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público someterlos a consideración del Congreso y ejecutarlos una vez aprobados.
- b) Prestar apoyo administrativo a los despachos judiciales y a sus secciones auxiliares, particularmente en lo que se refiere al reparto de los negocios y a la notificación de las providencias.
- c) Implantar y desarrollar sistemas de informática jurídica y de gestión judicial en todo el país, directamente o en asociación con otras entidades públicas y privadas.
- d) Realizar inversiones que le determinen rentabilidad.
- e) Promover la profesionalización y la racionalización del ejercicio de la función de los auxiliares de la justicia.
- f) Administrar y dirigir la carrera judicial, así como la capacitación de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público.
- g) Llevar el registro y control del ejercicio de la vigilancia judicial sobre todos los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional.

**Artículo 4o.** — La administración y dirección del Instituto estarán a cargo de un Consejo Directivo y un Director General.



**Artículo 5o.** — Serán miembros del Consejo Directivo con ejercicio de su función en forma personal e indelegable:

- a) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo presidirá.
- b) El Presidente del Consejo de Estado.
- c) El Presidente del Tribunal Disciplinario.
- d) El Procurador General de la Nación.
- e) El Ministro de Justicia.

**Artículo 6o.** — Son funciones del Consejo Directivo:

- a) Adoptar el presupuesto anual de ingresos, inversiones y gastos de la Rama Jurisdiccional y el del propio Instituto, así como los traslados presupuestales que se consideren necesarios.
- b) Adoptar los estatutos del Instituto y expedir los reglamentos generales.
- c) Establecer la planta de personal del Instituto.
- d) Señalar pautas para la ejecución del presupuesto de la Rama Jurisdiccional y del Instituto, con sujeción al aprobado por el Congreso.
- e) Facultar al Director General para adjudicar licitaciones y celebrar contratos dentro de los límites cuantitativos que se fijen en los estatutos.
- f) Resolver sobre las inversiones para rentabilidad que deba hacer el Instituto con recursos del presupuesto de la Rama Jurisdiccional no provenientes del Presupuesto Nacional.
- g) Nombrar el Director General.

**Artículo 7o.** — El Director General del Instituto deberá tener las calidades que exige la Constitución Política para ser Senador de la República y la misma remuneración de los Ministros del Despacho. Ejercerá la representación legal del organismo y ejecutará el presupuesto de la Rama Jurisdiccional y el del Instituto, dentro de las pautas señaladas por el Consejo Directivo. El Director General nombrará los empleados del Instituto de acuerdo con los estatutos que adopte el Consejo Directivo.

**Artículo 8o.** — El Instituto tendrá directores seccionales en los lugares donde funcionen oficinas regionales, cuya remuneración será igual a la de los Gobernadores.



**Artículo 9o.** — Son recursos de la Rama Jurisdiccional:

- a) Las partidas que se apropien en el presupuesto nacional.
- b) La participación de los rendimientos de los depósitos judiciales.
- c) El 50% de las sumas que perciba la Superintendencia de Notariado y Registro como participación de los ingresos notariales.
- d) Las expensas judiciales.
- e) El importe de las multas que impongan los jueces a las partes y a sus apoderados según la ley.
- f) Los derechos que se causen por servicios de informática jurídica y por venta de publicaciones.

**Artículo 10.** — Son recursos del Instituto para la Administración de la Rama Jurisdiccional del Poder Público los que actualmente percibe, como tales, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia.

**Artículo 11.** — El Instituto recibirá y administrará directamente los ingresos a que se refieren los dos artículos anteriores.

**Artículo 12.** — El Instituto gozará de los mismos privilegios y prerrogativas que se reconocen a la Nación.

**Artículo 13.** — La vigilancia de la gestión fiscal del Instituto corresponde a la Contraloría General de la República la cual dictará el reglamento fiscal acorde con la naturaleza de las funciones de aquél.

**Artículo 14.** — De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de doce meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, para:

- a) Establecer la estructura del Instituto para la Administración de la Rama Jurisdiccional del Poder Público.
- b) Determinar la competencia de los distintos órganos del Instituto y asignarles sus funciones administrativas, redistribuir las funciones que las actuales entidades estatales tienen sobre la materia de que se ocupará el Instituto y asignarles las que sean necesarias para el cabal cumplimiento de esta ley.
- c) Fijar los procedimientos administrativos para las actuaciones del Instituto.



- d) Modificar las normas procedimentales en todo cuanto sea necesario para el cabal cumplimiento de la presente ley, particularmente en lo relativo al reparto de los negocios judiciales, notificación de providencias, copias de piezas procesales, declaraciones extraprocesales.
- e) Modificar la planta de personal de las corporaciones judiciales y juzgados.
- f) Reestructurar el régimen de auxiliares de la justicia.

**Parágrafo.** — El Presidente de la República ejercerá las facultades que se le otorgan en este artículo asesorado por una comisión integrada por los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Tribunal Disciplinario, dos miembros designados por cada una de las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Senado y de la Cámara de Representantes.

**Artículo 15.** — La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D.E.,



## 2. Desjurisdiccionalización

### Descriminalización:

Uno de los aspectos que deben examinarse para descongestionar la justicia, se refiere a distintos mecanismos encaminados a resolver problemas sin la participación de los jueces.

En materia penal, por ejemplo, los avances de la criminología, los datos estadísticos de los diversos estudios y la naturaleza misma de algunos delitos, permiten conformar un esquema



de descriminalización que abarque los delitos juzgados por la jurisdicción penal aduanera, ciertos delitos contra el patrimonio económico y en especial el relacionado con la emisión de cheques sin provisión de fondos.

Según estudio realizado por el Instituto Ser de Investigación y la Contraloría General de la República, la descriminalización de algunas conductas establecidas como delitos, descongestionaría la Justicia Penal de un 11.6% de procesos para los cuales no existen en realidad efectos punitivos o terminan en desistimiento. El criterio despenalizador es de índole preventiva, con importantes efectos en la estructura misma del Derecho Penal pues, como dice Jean Pinatel, la inflación legislativa aniquila la función normal del Derecho Penal, creando un estado de anonimía. Mas allá de ese criterio teórico, importante para entender nuestra propuesta, si dicha inflación legislativa en la práctica ocasiona un buen número de procesos que termina por desistimiento o que admiten mecanismos para evitar la punición, es urgente realizar una reforma en esa materia.

Pero: ¿Qué criterios deberán tenerse en cuenta para lograr que la función preventiva y punitiva del Estado, indispensables para la ordenada actividad de la sociedad, encuentre un justo punto en forma tal que se sancionen las conductas realmente antisociales, con todo el rigor, pero no se haga ilusoria dicha perspectiva por la verdadera "asfixia" de los despachos judiciales? Nuestro Código Penal, acomodado a las modernas tendencias jurídicas señala en su artículo 4 como regla fundamental la teoría del "Interés Jurídico Tutelado", que marca un indudable punto de partida en la búsqueda de respuesta a dicho interrogante, en cuanto a la tipificación de una conducta como delictual.

Como dice un distinguido tratadista español (Juan Bustos Ramírez. Manual de Derecho Penal Español): "El principio de la necesidad de la pena corre el peligro de ser demasiado abstracto y vago, requiere pues de una base concreta de sustentación, que señale cuáles son los hitos y límites fundamentales del sistema. De ahí que no basta con el principio de necesidad de la pena, sino que resulta indispensable señalar *qué es lo protegido*, problema que la teoría penal ha intentado solucionar mediante el desarrollo de la teoría del bien jurídico. Es decir, la intervención del Estado sólo es posible y *necesaria* cuando se trata de la protección de bienes jurídicos. Luego este principio también entra a limitar materialmente el poder punitivo del Estado. No se pueden establecer penas que no tengan su fundamento en la existencia de un bien jurídico protegido, no se pueden establecer delitos que no estén contruidos sobre la existencia de un bien jurídico; es necesario ir a la descriminalización de todos aquellos hechos que no estén en relación a la defensa de un bien jurídico." (Pág. 50). Entre nosotros, existe el mismo movimiento doctrinario desde el punto de vista teórico en defensa de la descriminalización.

Al efecto la Comisión Asesora para la Reforma Integral de la Justicia Penal (Bogotá, Diciembre 15 de 1983) presidida por el distinguido penalista Dr. MIGUEL SANCHEZ MENDEZ expresa sobre el particular lo siguiente:



“Una correcta —e indispensable— política criminal debería evitar la criminalización, fenómeno que no ocurre entre nosotros, ni siquiera hoy cuando aún estrenamos Código Penal. Y es menester recabar en este punto que la legislación penal vigente no se guió por concepciones como la planteada”... “Mientras tanto la descriminalización ofrece innumerables ventajas, como las siguientes: La deflación penal, que evita en la ciudadanía el imperio del egocentrismo y del sentido común individual. En medio de tanta legislación punitiva llega un momento en que el ciudadano raso opta por hacer lo que le parece mejor. La maraña punitiva, decía alguien, es un factor ciminógeno que conduce a la anonimía, pues el hombre confía solamente en su propio juicio; disminuye el costo del delito en los campos de pesquisa, aplicación y ejecución de la ley; estabiliza la operatividad judicial y administrativa, pues la sobrecarga supera su capacidad”.

No ya desde un punto de vista científico, pero sí acudiendo a criterios pragmáticos, los resultados de la actuación represiva del Estado sirven como elemento para calificar el tratamiento que debe darse a una conducta que pudiera tipificarse como antijurídica. En otras palabras, resulta ilógica la movilización de todo el aparato jurisdiccional con un crecido costo, siendo por demás exiguo el presupuesto, cuando de dicha acción no se obtienen los resultados apropiados, bien sea por tratarse de investigaciones y procesos sin sindicados reales o porque el reato pueda ser materia de transacción, con lo cual la actividad jurisdiccional adelantada resulta inútil.

De otra parte, en los últimos años se ha acentuado un fenómeno francamente preocupante: Este es el de la indeferenciación o confusión de conductas que tradicionalmente ubicadas en el campo del derecho privado pretenden trasladarse al Derecho Penal. El incumplimiento de obligaciones meramente civiles o mercantiles se pretende ubicar con demasiada frecuencia en el campo penal, por considerar más cómoda y eficaz la “coerción del Estado” para obtener su cumplimiento. La distorsión producida por esta corriente de opinión ha desdibujado los campos de acción de las jurisdicciones civil y penal y, de contera, ha producido la acelerada acumulación de actuaciones en esta última.

La despenalización debe tener lugar en las siguientes conductas:

Cheques sin provisión de fondos, Delitos contra el patrimonio económico y Violación de domicilio.

#### Cheques sin provisión de fondos:

Nuestro Código Penal establece en el Artículo 357 delitos relacionados con el giro de cheques sin provisión de fondos y la orden injustificada de no pago.

En el estudio “Justicia Penal Juicio y Reforma” aparece una cifra digna de tener en cuenta: En 1977, el total de autos calificadorios con relación a este delito ascendió a 11.499, correspon-



diente al 12.09% de los dictados por todos los despachos judiciales del país en ese año. De ese total, sólo el 4.60% correspondieron a autos de llamamiento a juicio, y el 89.90% son de cesación de procedimiento, producida por el desistimiento del ofendido, o prescripción por abandono del interesado cuando obtuvo el pago correspondiente. Igualmente, se indica en el estudio que “de los negocios iniciados en 1972 por este delito, solo se dictaron en 1972, 1973 y 1974, seis sentencias condenatorias, y todas apenas de prisión y arresto inferiores a 18 meses”.

En materia de cheques se pretende con la penalización de estas conductas evitar vulneración de intereses particulares y estatales. Pero si la realidad nos demuestra que en la mayoría de los casos estos terminan por desistimiento o por pago, no obedece a un criterio de política criminal el disponer de la jurisdicción penal como la gran cobradora de los particulares bajo amenaza de sanción.

En el estudio denominado “Propuesta de Reforma Judicial” se había planteado la descriminalización de esta conducta. Al efecto se dice:

“Mención especial merece el empleo de este mecanismo “descriminalizador” respecto del actual sistema de protección penal del cheque. En efecto, entre nosotros ha sido preocupación constante el problema de los cheques impagados por cuenta cancelada o embargada, saldo insuficiente u orden injustificada de no pago; desde 1925 se ha venido legislando penalmente sobre esta materia, y a partir de 1970 se le dio protección penal casi integral a este título-valor; sin embargo, hemos de reconocer que los resultados —en cuanto a la disminución de tal clase de comportamientos— no han sido satisfactorios, y que el aumento considerable del volumen de asuntos que reciben los juzgados por este concepto es escandalosamente desproporcionado en relación con los fallos proferidos.” (PROPUESTAS DE REFORMA JUDICIAL. Alfonso Reyes Echandía y Jaime Castro. Editorial Temis 1978).

Creemos, en este aspecto, que si lo que se quiere proteger es la confianza pública en el cheque como título valor fundamental para las transacciones comerciales, y evitar abusos que en realidad se presentan con éste, lo más adecuado es crear mecanismos de naturaleza bancaria con los cuales se comine al pago so pena de sanciones en el ámbito del derecho privado y se impida al infractor la repetición de su conducta al ser privado por el Superintendente Bancario de la facultad de celebrar contratos de cuenta corriente bancaria. Con esto, se le da el tratamiento adecuado a las infracciones cometidas, y se evita convertir a la jurisdicción penal en organismo de cobro de los particulares, aspecto este en el cual muchas veces la acción penal se convierte en mecanismo extorsivo.

### Delitos contra el patrimonio económico

Las fronteras entre el incumplimiento de obligaciones civiles y los reatos contra la propiedad



cada vez se encuentran más desdibujadas. Ello conduce a la pretensión de utilizar la jurisdicción penal como instrumento para resolver controversias de carácter civil o mercantil con grave detrimento de las normas que garantizan la libertad de las personas y evidente abuso del derecho de poner en movimiento la función represiva del Estado. Ocurrido ello, de otra parte, no resulta ya posible en la mayoría de los casos, hacer cesar la acción penal. Como excepción se registran aquellos delitos que exigen querella de parte, respecto de los cuales el desistimiento de la parte agraviada extingue la acción y la condena (Artículo 77 del código Penal).

Dentro de los delitos contra el patrimonio económico, se encuentran en dicha situación el “Hurto entre condueños” (Artículo 353), el “Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito” (Artículo 361), “Usurpación” (Artículos 363 a 368). Si el interés ofendido y, por ende, protegido por la ley es el “Patrimonio Económico” no parece improcedente que otros tipos, además de los indicados, queden incluidos en el esquema de “Querella-desistimiento”. Más se defiende aquel interés jurídico con una “Composición” que resarza al ofendido que con la privación de la libertad del ofensor.

Por ello proponemos que requieran querella de parte el “Hurto simple” (Artículo 349), “Hurto de Uso” (Artículo 352) “Alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganados” (Artículo 354) “Sustracción de bien propio” (Artículo 363), “Desaparición de bien propio gravado con prenda” (Artículo 354) y “Daño en bien ajeno” (Artículo 370).

### Violación de domicilio:

Dentro de este mismo criterio preventivo de despenalización es importante revisar el Artículo 284 del Código Penal. En efecto, la mayoría de los casos de ocurrencia de este delito, está circunscrita a las condiciones especiales de determinado núcleo humano, como son por ejemplo los inquilinatos y vecindarios hacinados. En esas ocasiones, y debido a rencillas personales, se realizan comportamientos que, aunque configuran el tipo mencionado, en la práctica podrían resolverse mediante un poder policivo, sin necesidad de la intervención jurisdiccional. Como dato importante, el estudio del Instituto Ser dice que el total de autos calificadorios fue de 1.552, de los cuales solo el 5.99% fue de llamamiento a juicio y el 78.35% de cesación de procedimiento.

Para evitar la consecuente pérdida de tiempo que estos comportamientos ocasionan, es preciso establecer la querella para la investigación y el juzgamiento del delito mencionado, asegurando su castigo cuando ocurra y permitiendo que las partes desistan de continuar con un proceso cuando se dan casos como los citados, en los cuales no se justificaría llevar adelante un proceso.



Los proyectos de ley Nos. 2, 3 y 4 que se transcriben enseguida, plantean soluciones a los temas expuestos en lo relativo a descriminalización.

## PROYECTO DE LEY No. 3

Por la cual se dictan disposiciones sobre cheques.

### EL CONGRESO DE COLOMBIA

#### DECRETA

**Artículo 1o.** — El artículo 731 del Código de Comercio quedará así:

**Artículo 731.** — El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado por su culpa abonará al tenedor, como sanción, el 30% del importe del cheque sin perjuicio de que dicho tenedor persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasione.

En igual sanción incurrirá quien, a sabiendas, endose cheque que resulte impagado por los motivos indicados.

**Artículo 2o.** — Los bancos deberán remitir al Superintendente Bancario un informe sobre los cuentahabientes a quienes les hayan sido devueltos dos o más cheques de acuerdo con el artículo anterior, y dicho despacho procederá a sancionar a los titulares con la prohibición de apertura de cuentas bancarias a los mismos durante el lapso de dos años, mediante providencias que se comunicarán a todas las oficinas de los bancos en el país.

En caso de reincidencia el Superintendente prohibirá la apertura de nuevas cuentas a los infractores, hasta por diez años más.

**Artículo 3o.** — No obstante lo anterior y mediante solicitud del librador, con las justificaciones del caso, podrá el Superintendente dejar de aplicar las sanciones mencionadas.

**Artículo 4o.** — El incumplimiento por los bancos de lo ordenado por el Superintendente Bancario según la presente ley, será sancionado por éste con multa tanto al establecimiento bancario como al funcionario responsable, en la forma y términos previstos en la ley, en monto hasta de diez salarios mínimos mensuales.

**Artículo 5o.** — Derógase el artículo 357 del Código Penal.



**Artículo 6o.** — La presente ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,

## **PROYECTO DE LEY No. 4**

Por la cual se modifica el Código Penal.

### **EL CONGRESO DE COLOMBIA**

### **DECRETA**

**Artículo 1o.** — Los delitos contemplados en los artículos 284, 349, 352, 354, 363, 364 y 370 del Código Penal requieren querella de parte para efectos de la iniciación de la investigación.

**Artículo 2o.** — Esta ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,

#### **Asignación de trámites a los notarios:**

En “Colombia Eficiente” (Pág. 55) recomendábamos la desjurisdiccionalización de algunos de los asuntos estipulados en el artículo 649 del Código de Procedimiento Civil, concretamente los numerales 9 y 11, sobre adopción entre adultos y corrección, sustitución o adición de partidas del estado civil.

Sustentaba dicha solución, no solo la necesidad de agilizar la administración de justicia, entregándole a los notarios funciones que actualmente corresponden al juez, sino todo un cuerpo doctrinario expresado por los juristas Hugo Rocco y Angel Osorio, en el cual se demostraba la naturaleza en verdad administrativa de ciertos trámites que hoy tiene a su conocimiento la jurisdicción.

Dice Ugo Rocco: “Entre los medios con que el derecho provee a la tutela de los intereses humanos, está el importantísimo del reconocimiento jurídico de la voluntad privada. El derecho,



al atribuir efectos jurídicos a la voluntad privada, concurre con su eficacia a hacer que se logre el fin práctico a que ella tiende". Rocco concluye: "La Jurisdicción voluntaria no es propiamente actividad jurisdiccional, sino actividad administrativa encomendada a los órganos jurisdiccionales" (ROCCO, UGO. Tratado de Derecho Procesal Civil Tomo I Parte General. Editoriales Temis y De Palma. Págs. 121 y 123). Ahondando en este aspecto, hemos consultado también distintas propuestas y prácticas realizadas en los últimos años en nuestro país, lo cual no solo ha reforzado los criterios anteriores, sino que nos permite ahora proponer la extensión del conocimiento del notario a otros asuntos.

Uno de estos asuntos se refiere a la liquidación de sucesiones por escritura pública. Este aspecto fué propuesto por el Doctor Guillermo Anzola Toro, presidente del Colegio de Notarios de Bogotá en pasado homenaje que se le rindió. Además fué puesto en práctica mediante el decreto extraordinario 3828 de Diciembre 27 de 1985, para resolver con prontitud y sin trabas judiciales la liquidación de sucesiones de las personas fallecidas por causa del desastre del Nevado del Ruíz. No existe razón alguna para que este trámite no se extienda a todas las liquidaciones de sucesión cuando se realizan entre personas capaces y de común acuerdo.

En esta misma materia consideramos, que la adopción puede realizarse notarialmente cuando exista acuerdo entre el adoptante y el adoptivo mayores de edad. En esas condiciones, basta con que se presente solicitud con el lleno de ciertos requisitos y que, aprobados por el notario, se eleve a escritura pública la voluntad de las partes. En materia de corrección, sustitución o adición de la partida del estado civil, debe eliminarse el trámite judicial para volverlo simplemente notarial.

Otro aspecto importante de recomendar, es el que se refiere a la práctica de pruebas extrajudiciales por parte de notario. En este tipo de actuaciones no opera el principio de la intermediación de la prueba, por ser distinto el juez receptor del que luego la analizará. Así las cosas, nada obsta para que los notarios, guardianes de la fé pública, puedan practicar pruebas anticipadas, tales como interrogatorio de parte, reconocimiento espontáneo de documentos, reconocimiento a solicitud del interesado, exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles, testimonios para fines judiciales, testimonio como prueba sumaria e inspecciones judiciales y peritaciones (Artículos 294 a 300 de C. de P.C.). La propuesta recoge la opinión de varios juristas, entre ellas la del Dr. Germán Sarmiento.

Finalmente, es preciso establecer como trámite ante notario la separación de cuerpos en el matrimonio civil cuando existe voluntad de las partes para interrumpir la convivencia matrimonial, así como la celebración del mismo matrimonio.

Los proyectos de ley Nos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuyo texto se transcribe a continuación contienen fórmulas para lo sugerido en cuanto a la asignación de trámites a los notarios.



Por la cual se establece la liquidación notarial de las sucesiones y se dictan otras disposiciones.

## EL CONGRESO DE COLOMBIA

### DECRETA

**Artículo 1o.** — Las sucesiones podrán liquidarse ante notario, cualquiera fuere su cuantía, siempre que todos los herederos y el cónyuge sobreviviente sean capaces y procedan de común acuerdo, por medio de apoderado o apoderados quienes deben ser abogados titulados.

**Artículo 2o.** — Para la liquidación notarial de la sucesión se procederá así:

1. La liquidación deberá solicitarse al notario del círculo que corresponda al último domicilio del difunto en el territorio nacional o si a su muerte tenía varios, el del asiento principal de sus negocios.
2. A la solicitud se acompañará: a) El registro civil de defunción y la prueba de la calidad que invocan los interesados; b) El testamento si lo hubiere y la escritura de protocolización de las diligencias de apertura si fuere cerrado; c) La prueba del crédito invocado si dentro de los solicitantes compareciere un acreedor hereditario; d) El inventario de los bienes y deudas del causante y de la sociedad conyugal en su caso; e) El trabajo de partición o adjudicación de la herencia y de la liquidación de la sociedad, si fuere el caso, expresamente autorizado por el o los apoderados de los interesados.
3. Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud el notario examinará la documentación allegada y si se ajusta a las exigencias de la ley procederá en la forma prevista en el numeral siguiente.

Si faltare alguno de los anexos exigidos o no se ajustaren a la ley, dentro del mismo término el notario devolverá la solicitud a los interesados indicando las razones de la decisión.

4. Presentada la solicitud en debida forma el notario ordenará, dentro de los tres días siguientes, a costa de los interesados, la publicación de un aviso por una vez en un periódico de amplia circulación en el lugar, en el cual conste el nombre del causante y el de las personas que han formulado la petición, indicando la calidad que han aducido. El notario dará aviso inmediatamente a la Superintendencia de Notariado y Registro, sobre el trámite en curso, para que haga la anotación en el registro que para el efecto exista o se cree.



5. Quince días después de publicado el aviso, si no se han presentado objeciones, se elevará a escritura pública el trabajo de partición o adjudicación y se protocolizará con ésta todo el expediente. La escritura deberá inscribirse en la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos si hay inmuebles.
6. Si antes de autorizarse la escritura concurrieren otros interesados con igual o mejor derecho, o cualquiera de las personas indicadas en el artículo 1312 del Código Civil que no hubieren sido incluidas en el trabajo de partición, o aparecieren otros bienes, éste deberá rehacerse de común acuerdo y ser expresamente autorizado por el o los apoderados de los interesados.

**Artículo 3o.** — Si con posterioridad a la autorización de la escritura aparecieren otros bienes del causante o de la sociedad conyugal, los interesados podrán solicitar ante el mismo notario, si obraren de acuerdo, la adjudicación o partición adicional de dichos bienes, la cual se elevará a escritura pública con base en la minuta que expresamente autoricen el o los apoderados de los interesados.

**Artículo 4o.** — Si durante el trámite de la liquidación surgiere desacuerdo entre los interesados, o entre éstos y terceros que se presenten a hacer valer sus derechos, el notario devolverá la actuación a los solicitantes dejando constancia sobre tales circunstancias.

**Artículo 5o.** — Podrán acumularse en una sola actuación las liquidaciones a que se refiere el artículo 622 del Código de Procedimiento Civil y en tal caso será competente el notario a quien corresponda según el numeral 1o. del artículo 2o. de esta ley, respecto de la sucesión de uno cualquiera de los cónyuges, a elección de los interesados. Si no hubiere acuerdo, las liquidaciones se harán judicialmente.

**Artículo 6o.** — Si se adelantaren simultáneamente dos o más liquidaciones notariales de una misma sucesión y no hubiere acuerdo de los interesados para acumularlas, los notarios, de oficio o a solicitud de cualquiera de aquellos, suspenderán la tramitación y la devolverán en el estado en que se encuentre.

**Artículo 7o.** — Cuando la Superintendencia de Notariado y Registro conozca que se están adelantando varias actuaciones notariales para la liquidación de una misma sucesión, informará de ello a los respectivos notarios para que procedan de conformidad con el artículo anterior.

**Artículo 8o.** — Iniciado proceso judicial de sucesión prevalecerá éste y el notario deberá enviar al juez la actuación.

**Artículo 9o.** — La partición o adjudicación realizada de acuerdo con la presente ley producirá los mismos efectos legales que las adelantadas en procesos judiciales.



**Artículo 10.** — Respecto de las sucesiones que se liquiden en conformidad con la presente ley, quedan a salvo las acciones de herederos previstas en el Capítulo IV del Título 7o. del Libro 3o. del Código Civil.

**Artículo 11.** — La presente ley se aplicará también a las sucesiones en las que hubiere tenido lugar la delación de la herencia antes de su vigencia, aunque su liquidación ya curse judicialmente. En este último caso podrán los interesados que se hallen en las circunstancias señaladas en el artículo 1o., pedir al juez que envíe la actuación en el estado en que se encuentre al notario competente y aquél así lo ordenará mediante auto de "cúmplase".

**Artículo 12.** — Las expensas que se causen en la actuación notarial serán a cargo de quienes la solicitaron con base en la fijación que de ellas se haga de acuerdo con los procedimientos y por las autoridades que actualmente señalan los emolumentos que pueden cobrar los notarios.

**Artículo 13.** — La presente ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,

## PROYECTO DE LEY No. 6

Por la cual se regula el régimen de la adopción entre personas capaces.

### EL CONGRESO DE COLOMBIA

### DECRETA

**Artículo 1o.** — La adopción, cuando tanto el adoptante como el adoptivo sean mayores de edad, no requerirá sentencia judicial.

Los interesados deberán expresar su consentimiento mediante escritura pública en la cual se indicará si se trata de adopción simple o plena, de conformidad y para los efectos de los artículos 277 a 285 del Código Civil.

**Artículo 2o.** — Las expensas que se causen por la actuación del notario serán a cargo de quien la solicitó, con base en la fijación que de ellas se haga de acuerdo con los procedimientos y por las autoridades que actualmente señalan los emolumentos que pueden cobrar los notarios.



**Artículo 3o.** — Esta ley rige a partir de su promulgación.

Dada en Bogotá, D.E.,

---

---

**PROYECTO DE LEY No. 7**

---

---

Por la cual se dictan unas disposiciones sobre registro del estado civil.

**EL CONGRESO DE COLOMBIA**

**DECRETA**

**Artículo 1o.** — El artículo 94 del Decreto ley 1260 de 1970 quedará así:

**Artículo 94.** — Mediante escritura pública el propio inscrito o su representante podrá sustituir los nombres propios extravagantes o ridículos que le hayan sido asignados, o adicionar el registro con la inclusión de los nombres, apellidos o seudónimos que haya venido usando o que disponga usar en el futuro, o con la supresión de alguno o algunos de aquéllos, todo con el fin de fijar su identidad personal.

La escritura que disponga la alteración del registro deberá inscribirse en todos los afectados.

**Artículo 2o.** — La supresión o adición del apellido del marido precedido de la partícula "de" en el documento de identidad de la mujer casada con anterioridad al 27 de julio de 1970, se ajustará al procedimiento establecido en el primer inciso del artículo anterior.

**Artículo 3o.** — El hijo extramatrimonial no reconocido llevará como apellidos los de la madre.

**Artículo 4o.** — Derógase el inciso tercero del artículo 52 del decreto ley 1260 de 1970.

**Artículo 5o.** — Las expensas que se causen por la actuación del notario serán a cargo de quien la solicitó, con base en la fijación que de ellas se haga de acuerdo con los procedimientos y por las autoridades que actualmente señalan los emolumentos que pueden cobrar los notarios.



**Artículo 6o.** — La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D.E.,

## PROYECTO DE LEY No. 8

Por la cual se atribuye a los notarios competencia para practicar pruebas anticipadas.

### EL CONGRESO DE COLOMBIA

#### DECRETA

**Artículo 1o.** — Los notarios deberán practicar las pruebas anticipadas a que se refieren los artículos 294 a 300 del Código de Procedimiento Civil, con sujeción a las reglas señaladas en el artículo 301 del mismo Código, cuando se lo solicite cualquier persona mediante apoderado. Su actuación, en tales casos, dará a dichas pruebas el mismo valor que tienen las que practican los jueces.

Las atribuciones aquí conferidas a los notarios no alteran en manera alguna la competencia de los jueces para los mismos efectos.

**Artículo 2o.** — Las expensas que se causen en la práctica de las pruebas a que se refiere el artículo anterior, serán a cargo de quien las solicita con base en la fijación que de ellas se haga de acuerdo con los procedimientos y por las autoridades que actualmente señalan los emolumentos que pueden cobrar los notarios.

**Artículo 3o.** — La presente ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,

## PROYECTO DE LEY No. 9

Por la cual se autoriza la separación consensual de cuerpos mediante trámite notarial y se modifica el régimen de la separación judicial de cuerpos de matrimonios civiles.



## EL CONGRESO DE COLOMBIA

### DECRETA

**Artículo 1o.** — El artículo 165 del Código Civil quedará así:

**Artículo 165.** — Hay lugar a la separación de cuerpos en los siguientes casos:

1. En los contemplados en el artículo 154 de éste Código.
2. Por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, elevado a escritura pública.

**Artículo 2o.** — Sustitúyense los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 166 del Código Civil por los siguientes dos incisos:

En la escritura de separación los cónyuges deberán determinar la manera como atenderán en adelante el cuidado personal de los hijos comunes, la proporción en que contribuirán a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos y, si fuere el caso, al sostenimiento de cada cónyuge. En cuanto a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes responderán solidariamente ante terceros, y entre sí en la forma indicada por ellos.

El notario se abstendrá de autorizar la escritura de separación cuando con ella se violen las disposiciones legales o se cause injusto perjuicio a las partes, a sus hijos comunes o a terceros.

**Artículo 3o.** — El numeral segundo del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

**Artículo 414.** — *Asuntos sujetos a su trámite.* Se tramitarán y decidirán en proceso abreviado los siguientes asuntos cualquiera que sea su cuantía:

2o. Divorcio del matrimonio civil y separación judicial de cuerpos del matrimonio canónico, salvo cuando ésta se solicite por mutuo acuerdo de las partes.

**Artículo 4o.** — El numeral 16 del artículo 442 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

16. La separación de cuerpos fundada en el mutuo consenso de los cónyuges, en el matrimonio canónico. En estos procesos se dará cumplimiento a las disposiciones contenidas en los incisos 2 y 3 del artículo 166 del Código Civil.

**Artículo 5o.** — Adiciónase, bajo el número 17, el siguiente numeral al artículo 442 del Código de Procedimiento Civil.



## 17. Separación judicial de cuerpos en el matrimonio civil.

**Artículo 6o.** — Las expensas que se cuasen por la actuación del notario en la separación consensual de cuerpos serán a cargo de quien la solicitó, con base en la fijación que de ellas se haga de acuerdo con los procedimientos y por las autoridades que actualmente señalan los emolumentos que pueden cobrar los notarios.

**Artículo 7o.** — Esta ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,

## PROYECTO DE LEY No. 10

Por la cual se establece la celebración de matrimonio civil ante notario.

## EL CONGRESO DE COLOMBIA

### DECRETA

**Artículo 1o.** — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 126 del Código Civil, el matrimonio podrá celebrarse ante el notario del domicilio de la mujer, con la plena observancia de los requisitos previstos en los artículos que integran el título cuarto del libro primero del citado código.

**Artículo 2o.** — Las expensas que se causen por la actuación del notario serán a cargo de quien la solicitó, con base en la fijación que de ellas se haga de acuerdo con los procedimientos y por las autoridades que actualmente señalan los emolumentos que pueden cobrar los notarios.

**Artículo 3o.** — La presente ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,

### Obligatorio intento de conciliación judicial:

La solución de un conflicto no siempre debe ocasionar un proceso ante la jurisdicción, pues resulta más consistente y lógico que, con la colaboración e imparcialidad de un tercero, mediante



diálogo previo al proceso o por fuera de él y con una mejor valoración de los intereses en disputa, resuelvan en forma inmediata sus diferencias.

Para este efecto, es importante establecer audiencias previas a los procesos, con el objeto de que el juez, una vez recibida la demanda y su contestación promueva una reunión de las partes, y mediante un corto trámite escuche e invite a la conciliación.

En tal sentido se presenta un proyecto de ley que establece la conciliación en algunos procesos civiles y promueve la celebración del compromiso. El proyecto crea una audiencia para celebrar dentro de los diez días siguientes al auto que la señala, con el objeto de intentar la conciliación.

El siguiente es el proyecto:

## **PROYECTO DE LEY No. 11**

Por la cual se establece la conciliación en algunos procesos civiles.

### **EL CONGRESO DE COLOMBIA**

#### **DECRETA**

**Artículo 1o.** — Cuando a la decisión de los jueces civiles se sometan controversias susceptibles de transacción, el juez que conozca del asunto, dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del traslado de la demanda principal o del de la reconvención si la hubiere, señalará fecha y hora para la celebración de una audiencia en la cual podrán las partes conciliar sus diferencias. Las partes, en la demanda o su contestación, podrán expresar su deseo de no conciliar, caso en el cual no habrá lugar a la audiencia.

La audiencia deberá efectuarse a más tardar dentro de los diez días siguientes a la fecha del auto que la decreta; sólo podrá ser suspendida por el juez a petición de las partes por una sola vez y deberá continuar dentro de los diez días siguientes, según se indique en la providencia que acepte la suspensión. La no asistencia de cualquiera de las partes se tendrá como indicio de mala fé para efectos de la decisión sobre costas en la sentencia.

El juez tendrá el deber de promover la conciliación mediante la presentación a las partes de las sugerencias u observaciones que considere pertinentes; si se conciliare, el acuerdo respectivo se consignará en el acta para su aprobación por aquél, la cual se impartirá, cuando



no recaiga sobre objeto o causa ilícitos, por medio de auto que se dictará en la misma audiencia y se notificará a las partes en estrados. Las partes podrán conciliar todas o algunas de sus diferencias. Una vez en firme la providencia aprobatoria, la conciliación tendrá fuerza de cosa juzgada.

Las opiniones emitidas por el juez en la audiencia, tendientes a obtener la conciliación de las partes, no constituirán causales de impedimento o de recusación.

**Artículo 2o.** — La presente ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,

### Convenio privado entre comerciantes:

La práctica comercial ha instrumentado mecanismos para resolver los problemas surgidos entre el comerciante y sus acreedores, los cuales se realizan al margen de los actuales procesos de concordato o quiebra, con el beneplácito del sector mercantil. Desafortunadamente, este tipo de convenios no surte efectos importantes en la materia sobre la cual tratan, particularmente cuando se refieren a la extinción de obligaciones.

En documento de la Cámara de Comercio, se expresaba la necesidad de regular legalmente dicha institución, siguiendo al respecto la práctica de otros países, principalmente Chile e Italia, en los cuales se consagra el “Convenio Amistoso por Unanimidad” y el “Convenio Extrajudicial” en un sentido similar al propuesto.

Ahora bien, por tratarse en los convenios privados a los cuales nos referimos, de situaciones de iliquidez o insolvencia del comerciante con sus acreedores, aspectos estos puramente comerciales y en los cuales prima la práctica mercantil, lo más lógico sería que estos convenios se celebraran ante la Cámara de Comercio, la cual cuenta con una infraestructura que le permitiría prestar colaboración en la dirección de las deliberaciones y la indispensable labor de secretaría.

El proyecto expresa:

### **PROYECTO DE LEY No. 12**

Por la cual se establece el convenio privado entre comerciantes.



## EL CONGRESO DE COLOMBIA

### DECRETA

**Artículo 1o.** — Con el fin de atender el cumplimiento de sus obligaciones el comerciante que no se encuentre en proceso de quiebra o concordato preventivo, podrá solicitar la celebración de un convenio extrajudicial con sus acreedores.

La petición, coadyuvada por los acreedores que representen por lo menos el 30% del valor de los créditos civiles y comerciales, deberá presentarse ante el Secretario de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal del comerciante, acompañada de los siguientes documentos:

- a) Estados financieros debidamente certificados por un contador público;
- b) Relación de las circunstancias de hecho y de derecho que motivan la solicitud;
- c) Propuestas de arreglo debidamente justificadas;
- d) Relación de sus acreedores, con especificaciones del monto de sus créditos, garantías y la indicación de dirección.

**Artículo 2o.** — Presentada la solicitud en la forma establecida en el artículo anterior, la Cámara de Comercio citará a deliberaciones a los acreedores de obligaciones civiles y comerciales relacionados por el deudor.

La convocación se efectuará personalmente o por correo certificado. Dicha reunión deberá celebrarse dentro de los 20 días siguientes a la citación en el día, hora y lugar señalados en la misma.

**Artículo 3o.** — La reunión será coordinada por el Secretario de la respectiva Cámara de Comercio, o quien haga sus veces de acuerdo con los reglamentos de la misma, quien levantará un acta sobre lo ocurrido en la sesión y los acuerdos adoptados. Si no se llegare a un acuerdo, en la misma reunión, el Secretario fijará fecha y hora para nuevas deliberaciones.

Las deliberaciones no podrán extenderse por más de un mes, contado a partir de la primera reunión, salvo lo que convengan el deudor y la totalidad de los acreedores citados.

**Artículo 4o.** — El acuerdo deberá ser aprobado por el setenta y cinco por ciento (75%) de los titulares de los créditos civiles y comerciales relacionados, con la aceptación expresa del deudor. En ningún caso dicho convenio producirá los efectos de novación respecto de las obligaciones materia del mismo, pero su cumplimiento las extinguirá, sin perjuicio de las reservas expresamente pactadas.



**Parágrafo 1o.** — El convenio que haya sido celebrado en la forma prevista en este artículo producirá efecto respecto de todos los acreedores civiles y comerciales que hayan sido citados o participen en las deliberaciones. No obstante, serán inoponibles a los ausentes y disidentes las decisiones que no tengan carácter general.

El acreedor que hubiere sido omitido por el deudor en la relación de acreedores, podrá aceptar el convenio y exigir que se cumpla también a su favor, si fuere posible, o ejercitar las acciones que le correspondan como si el convenio no existiere. La aceptación del convenio se surtirá mediante el registro del documento en que conste su conformidad ante el Secretario de la Cámara en donde hubiere sido tramitado.

**Parágrafo 2o.** — El convenio se hará observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos y no podrá adoptarse con menoscabo de los derechos de los titulares de los créditos laborales y fiscales.

**Artículo 5o.** — El acuerdo deberá constar en acta que será levantada por el Secretario de la Cámara de Comercio respectiva y firmada por éste, el deudor y los acreedores, o una comisión designada por éstos.

Copia del acta contentiva del acuerdo, junto con las demás correspondientes a las deliberaciones efectuadas, será inscrita en la Cámara de Comercio del domicilio principal del deudor y de sus sucursales, así como en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, si es del caso.

**Artículo 6o.** — Durante la tramitación y cumplimiento del convenio a que se refiere esta ley no podrá admitirse solicitud de concordato ni de declaratoria de quiebra. Para tal efecto, la Cámara de Comercio correspondiente informará sobre la tramitación o existencia del convenio a los funcionarios competentes para el conocimiento de dichos procesos.

Los créditos regulados por el convenio privado no podrán hacerse exigibles a través de procesos de ejecución. Por consiguiente, una vez aprobado el convenio se suspenderán los procesos ejecutivos que se hubieren iniciado a causa de los mismos y se levantarán las medidas cautelares que hubieren sido decretadas; para acreditar la existencia del acuerdo será suficiente una certificación de la Cámara de Comercio donde se hubiere celebrado.

En el caso de que transcurrido el término previsto en el artículo 3o. no se haya obtenido el acuerdo, el deudor no podrá tramitar concordato preventivo alguno y deberá denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones, si fuere el caso, quien declarará la quiebra.

Si el deudor no cumple las obligaciones contraídas en el convenio, a solicitud de cualquiera de los acreedores el mismo será resuelto como incidente por el juez competente, quien declarará la quiebra si se dan las condiciones para la misma.



**Artículo 7o.** — Los comerciantes, contadores públicos o revisores fiscales que presenten, autoricen o certifiquen estados financieros discordantes con la realidad contable, para los efectos del convenio de que trata esta ley, serán sancionados con pena de prisión de cuatro a seis años.

**Artículo 8o.** — Cuando se trate de sociedades la sanción establecida en el artículo anterior se aplicará a los administradores que ordenen, consientan o realicen tales hechos punibles.

**Artículo 9o.** — La presente ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,

**3. Arbitraje**  
DECRETO



### 3. Arbitraje

Dentro de las soluciones para la administración de justicia, el arbitraje es un instrumento que debe extenderse a un cúmulo de situaciones, procurando de una parte el fortalecimiento interno de dicha institución y, de otra, que los comerciantes puedan acudir a ella en determinadas condiciones jurídicas.

Las ventajas del arbitraje radican, entre otras, en que es un proceso mucho más rápido que el de la jurisdicción y está conformado por personas especializadas en la materia objeto de controversia, las cuales pueden dedicarse con mayor atención al asunto sometido a su conocimiento.

La Cámara de Comercio de Bogotá ha organizado los Centros de Arbitraje y Conciliación, los cuales prestan actualmente una valiosa colaboración para resolver controversias cuando las partes se someten a la decisión de los árbitros. Estos Centros deben, mediante proyecto de ley, fortalecer sus funciones, para que consigan los resultados propuestos.

De otra parte, para que el arbitraje pueda realizarse con mayor agilidad y eficacia, y para que abarque distintos asuntos en controversia, se deben intentar modificaciones al procedimiento arbitral.

Parece conveniente, por otra parte, permitir la utilización del arbitraje en los casos relacionados con contratos de arrendamiento. Una vez obtenido el laudo, la parte puede intentar el lanzamiento dirigiéndose a la autoridad encargada, con lo cual se evita el largo trámite que es preciso realizar ante la jurisdicción.



Los proyectos de ley Nos. 13 y 14, recogen las inquietudes propuestas.

## **PROYECTO DE LEY No. 13**

- Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre procedimiento arbitral.

### **EL CONGRESO DE COLOMBIA**

#### **. D E C R E T A**

**Artículo 1o.** — Los comerciantes que sometan a árbitros la decisión de sus controversias, designarán uno o tres árbitros de común acuerdo, o podrán deferir el nombramiento, total o parcialmente, a un tercero o a los Centros de Arbitraje y Conciliación Mercantiles, organizados por las Cámaras de Comercio, que se encuentren debidamente reconocidos por el Gobierno Nacional. El tribunal funcionará en la sede del Centro de Arbitraje respectivo y su fallo será en derecho, a menos que las partes determinen que sea en conciencia con anterioridad a la designación de los árbitros.

Los árbitros deben ser ciudadanos colombianos en ejercicio de sus derechos civiles y abogados inscritos cuando deba fallarse en derecho. Su escogencia se hará de listas elaboradas por el Centro de Arbitraje correspondiente, cuando el nombramiento corresponda a tales centros.

**Artículo 2o.** — Los centros de Arbitraje y Conciliación Mercantiles deberán promover una etapa conciliatoria entre las partes, dentro de los quince días siguientes al recibo de la solicitud de nombramiento de árbitros y, en caso de que en ella no se celebre transacción, se procederá a la integración del tribunal.

**Artículo 3o.** — La designación de los árbitros y del secretario corresponderá al Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio del domicilio de los contratantes. Si éstos tuvieren domicilios correspondientes a diferentes Centros, elegirá entre ellos el solicitante de la designación de los árbitros y, en todo caso, conocerá de ella el primero que reciba la solicitud.

**Artículo 4o.** — El reglamento interno al que deba sujetarse el tribunal y la forma de remuneración de los árbitros y del Secretario serán los señalados en los estatutos del Centro de Arbitraje respectivo, que deberán ser aprobados por el Gobierno Nacional.

**Artículo 5o.** — Las Cámaras de Comercio deberán organizar sus respectivos Centros de Arbitraje y Conciliación Mercantiles dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la presente ley.



**Artículo 6o.** — El inciso 4o. de los artículos 2011 del Código de Comercio y 663 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

El compromiso y la cláusula compromisoria deberán constar por escrito, y serán nulos cuando no cumplan este requisito o los exigidos en el inciso 1o. de este artículo.

**Artículo 7o.** — El numeral 3o. de los artículos 2012 del Código de Comercio y 664 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

3. El nombre de los árbitros, que deberán ser tres, salvo que las partes acuerden uno solo o deleguen a un tercero su designación total o parcial, o deleguen a los árbitros nombrados por ellas la designación del tercer árbitro.

**Artículo 8o.** — El inciso tercero de los artículos 2013 del Código de Comercio y 665 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

Caso de que la cláusula compromisoria nada diga sobre el nombramiento de árbitros, las partes deberá hacerlo de acuerdo, y si esto no fuere posible, los árbitros serán nombrados, a solicitud de cualquiera de ellas, por la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde deba funcionar el tribunal. La solicitud de una de las partes dirigida a la Cámara de Comercio será suficiente prueba de la ausencia de acuerdo entre ellas para la designación de los árbitros.

**Artículo 9o.** — Los artículos 2014 del Código de Comercio y 666 del Código de Procedimiento Civil, quedarán así:

Si en el compromiso o la cláusula compromisoria se hubiere convenido que los árbitros sean nombrados por un tercero, a la solicitud se acompañará prueba del contrato, y en ella se expresarán las diferencias existentes y las direcciones de las partes.

Si el tercero no hiciere la designación, ésta se hará por la Cámara de Comercio del lugar donde deba funcionar el tribunal.

A la petición formulada ante la Cámara de Comercio respectiva, el solicitante acompañará copia de la solicitud elevada ante el tercero designado y manifestará, bajo la gravedad del juramento, que dicho tercero no ha procedido a la designación, dentro de los quince días siguientes a la solicitud.

**Artículo 10.** — El inciso primero de los artículos 2015 del Código de Comercio y 667 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

Los árbitros deberán comunicar su aceptación a quien los hubiese designado, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se les comunique el nombramiento, lo cual se hará



mediante oficio entregado en su habitación o en el lugar donde trabajan, y si guardan silencio se entenderá que no aceptan.

**Artículo 11.** — Adiciónanse los artículos 2016 del Código de Comercio y 668 del Código de Procedimiento Civil con el siguiente párrafo:

Quien recuse un árbitro, deberá otorgar caución suficiente para garantizar los perjuicios y las costas que se causen. Esta caución será determinada por los restantes árbitros o por el juez, según el caso.

**Artículo 12.** — Los numerales 1o. y 2o. de los artículos 2018 del Código de Comercio y 670 del Código de Procedimiento Civil, quedarán así:

1o. En el acto de instalación el tribunal fijará la suma que estime necesaria para gastos de funcionamiento y honorarios de sus miembros y del secretario. Si dentro de los cinco días siguientes a la notificación por estado de la anterior providencia, cualquiera de las partes objeta la regulación y expresa las sumas que considere justas, el tribunal resolverá en el término de cinco días, y si rechaza la objeción enviará lo actuado al juez para que de plano haga la regulación. Ejecutoriado el auto del juez, que se notificará por estado y es inapelable, se entregará el expediente al secretario del tribunal.

No procederá la objeción de honorarios cuando ellos se ajusten a las tarifas señaladas en los estatutos de los Centros de Arbitraje y Conciliación mercantiles, aprobados por el Gobierno Nacional.

2o. En firme la regulación de gastos y honorarios, cada parte consignará dentro de los diez días siguientes, en manos del presidente del tribunal, la mitad de la suma respectiva y hará entrega del documento en el que consten las cuestiones sometidas a la decisión arbitral.

**Artículo 13.** — El numeral 8o. del artículo 2019 del Código de Comercio, quedará así:

8o. Las actas de las audiencias y diligencias se suscribirán por los árbitros y el secretario, y se aplicará lo dispuesto en el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil.

**Artículo 14.** — El numeral 8o. del artículo 671 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

8o. Las actas de las audiencias y diligencias se suscribirán por los árbitros y el secretario, y se aplicará lo dispuesto en el artículo 109.

**Artículo 15.** — Los numerales 9o. y 11o. de los artículos 2019 del Código de Comercio y 671 del Código de Procedimiento Civil, quedarán así:



9o. A las audiencias y diligencias deberán asistir todos los árbitros. Si alguno dejare de hacerlo, los restantes miembros lo requerirán para que dentro de los cinco días siguientes presente prueba siquiera sumaria que justifique su ausencia. En caso de no hacerlo, se procederá a reemplazarlo en la misma forma prevista para su designación.

11. El tribunal podrá decretar medidas cautelares.

**Artículo 16.** — El numeral 7o. del artículo 86 del Código de Comercio quedará así:

7o. Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por tres miembros de su Junta Directiva.

**Artículo 17.** — Para los efectos de la constancia escrita a que se refiere el inciso cuarto de los artículos 2011 del Código de Comercio y 663 del Código de Procedimiento Civil, se entenderá por tal un canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex, cuando no aparezca expresamente en cláusula compromisoria de un contrato, o en un compromiso.

**Artículo 18.** — La presente ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,

## **PROYECTO DE LEY No. 14**

Por la cual se dictan disposiciones sobre arbitraje en los contratos de arrendamiento.

### **EL CONGRESO DE COLOMBIA**

#### **DECRETA**

**Artículo 1o.** — Pueden someterse a la decisión de árbitros las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir, con ocasión de la celebración, ejecución, terminación y liquidación de cualquier clase de contratos de arrendamiento.

Así mismo, podrán someterse a arbitraje las diferencias que surjan entre las partes al momento de la renovación de los contratos de arrendamiento para establecimientos de comercio.



Para los efectos de este artículo, bastará que el compromiso o la cláusula compromisoria consten por escrito.

**Artículo 2o.** — Cuando no se puedan notificar personalmente las providencias dictadas por el tribunal, el secretario deberá obrar en la forma prevista en el numeral 3 del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil.

**Artículo 3o.** — Si la controversia se funda en falta de pago, el arrendatario no podrá ser oído en el proceso si no consigna a órdenes del tribunal, los cánones que adeude y los que se causen durante el término del proceso, salvo que presente los recibos de pago o consignación a nombre del arrendador conforme a la ley. El tribunal procederá de conformidad con el numeral 6 del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil en relación con los cánones depositados.

**Artículo 4o.** — Cuando se trate de lanzamiento de arrendatario, en firme el laudo el tribunal remitirá copia auténtica de aquél al alcalde o funcionario de policía competente para que proceda a la entrega del bien, de acuerdo con los artículos 337 y 339 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de la ejecución de las demás decisiones del laudo por la justicia ordinaria.

**Artículo 5o.** — Esta ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,



## **4. Racionalización de gestiones por y ante la administración de justicia**

Mediante algunas modificaciones al procedimiento es posible ampliar la capacidad operativa de nuestros despachos judiciales. Estas modificaciones deben abarcar los distintos estatutos normativos, principalmente los de procedimiento civil, laboral, el código del comercio, el código contencioso-administrativo. Muchas de las modificaciones al código de procedimiento civil son también aplicables por extensión a otras legislaciones.

### **Presentación personal de escritos:**

Una de las formas de descongestionar la justicia es permitir que los particulares puedan presentar sus demandas y poderes ante notario, sin los excesivos problemas que la presentación



personal en el juzgado genera, con lo cual el despacho se descongestiona de una función que el notario puede realizar sin que ello afecte la segura administración de justicia.

En “Colombia Eficiente” se mencionaba la necesidad de una modificación a los artículos 84, 340 y 345 del Código de Procedimiento Civil. Consiguientemente y con base en el proyecto elaborado por la Comisión Asesora sobre reformas civiles y comerciales, se propone que el acto formal de la presentación de la demanda pueda hacerse tanto en el despacho al cual se dirige como ante un funcionario idóneo para dar fé del ritualismo, como los son otros funcionarios jurisdiccionales y los notarios públicos.

Igualmente, permite la presentación del escrito de transacción en la forma mencionada y se amplía la forma de presentación de la demanda en los términos mencionados a todos los casos en que se exija presentación personal de un escrito.

El proyecto de ley No. 15 recoge estos planteamientos.

## PROYECTO DE LEY No. 15

Por la cual se reforman algunas disposiciones del Código de Procedimiento Civil y se dictan otras disposiciones.

### EL CONGRESO DE COLOMBIA

#### DECRETA

**Artículo 1o.** — El inciso primero del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

Toda demanda deberá presentarse personalmente por quien la suscribe, ante el secretario de la autoridad judicial a quien se dirija; o remitírsela, previa autenticación o reconocimiento de firma ante juez o notario, caso en el cual sólo se considerará presentada a su recibo en el despacho judicial de su destino.

**Artículo 2o.** — El artículo 340 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

#### Oportunidad y trámite

En cualquier estado del proceso inclusive durante el trámite del recurso de casación, las partes podrán transigir en todo o en parte el litigio.



Para que la transacción produzca efectos en el proceso, deberá solicitarse su reconocimiento por escrito, presentado como se dispone para la demanda por las partes, expresando los términos de ella, o acompañando el documento que la contenga. El juez rechazará la transacción cuando recaiga sobre objeto y causa ilícitos.

Así mismo, declarará terminado el proceso sólo respecto de las personas que han celebrado la transacción y del objeto de ésta, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 51 sobre cuadyuvantes y litisconsortes necesarios.

Cuando el proceso termine por transacción no habrá lugar a costas, salvo convención en contrario.

Si la transacción requiere licencia y aprobación judiciales, el mismo juez que conoce del proceso podrá resolver la solicitud como incidente.

**Artículo 3o.** — En todos los casos en que se exija presentación personal de un escrito, dentro de los procesos civiles, administrativos y laborales, o dentro de los procedimientos administrativos, ésta se surtirá conforme se dispone para la demanda en el Código de Procedimiento Civil.

**Artículo 4o.** — Esta ley rige desde su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D.E.,

### Notificaciones:

El artículo 401 del C. de P. C. establece la notificación personal de la contrademanda. En realidad esta notificación no tiene sentido dentro de una sana economía procesal, pues ya está trabada la litis y las partes conocen del objeto en discusión.

En relación con las notificaciones, es preciso también regularizar el sistema actual de pago, de manera que este se realice con una debida reglamentación y permita de paso darle a la presentación de la demanda la debida seriedad. Un proyecto en tal sentido exige presentar con la demanda comprobación de pago de las expensas de la notificación, con lo cual además se le abre camino a la función que, en otro proyecto, se atribuye al Instituto para la Administración de la Rama Jurisdiccional.

### Hora judicial:

El artículo 123 del C. de P.C. establece: “Cuando se fije determinada hora para un acto judicial, se entiende que debe iniciarse dentro de esa hora, que se contará a partir del momen-



to en que el reloj la anuncia”. Se ha podido observar en la práctica jurídica, que en las audiencias la hora judicial se ha convertido en “norma procesal del incumplimiento”. En efecto, la asistencia de las partes a éstas, se realiza dentro de los últimos quince minutos de la hora, lo que ocasiona un cambio en el programa del juzgado, con sensible desperdicio de tiempo. Es necesario entonces, transformar la hora judicial en “media hora judicial”, es decir, establecer como tiempo máximo para que las partes y los interesados concurran a la diligencia, treinta minutos a partir del comienzo de la hora. Transcurridos estos treinta minutos iniciales, la diligencia no se inicia por incumplimiento.

### **Condena en concreto:**

El Código de Procedimiento Civil permite y regula la liquidación de la condena en abstracto en los artículos 307 y 308. Esta procede cuando existe pretensión de condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Si no se puede fijar su importe en cantidad líquida en la sentencia, pero aparece que se causó un daño o que se dejó de percibir un provecho como frutos o renta, se deben anunciar las bases con arreglo a las cuales debe hacerse su liquidación posteriormente.

En la práctica tal figura entraba la rápida administración de justicia. Como corresponde a su misma naturaleza, la condena in-genere debe ser una medida excepcional; en la realidad se ha convertido en una actuación común en los procesos declarativos. De otra parte, la liquidación de estas condenas es una actuación muchas veces tanto o más dilatada que el mismo proceso declarativo, el cual es de por sí demorado y en el cual las partes cuentan con un término probatorio que debería ser suficiente para determinar concretamente el monto de los intereses, daños y perjuicios, etc.

Para evitar esta situación anómala, en beneficio de la rapidez procesal, creemos que se debe eliminar la condena in-genere. Es decir, el juez solo debería proferir sentencias condenando al pago de perjuicios en forma concreta y determinada.

De esta manera, si al momento de fallar faltan los elementos adecuados para hacer una condena en concreto, debe dictar un auto para mejor proveer y con base en nuevas pruebas, despejar las dudas al respecto. Algunos casos concretos en que la necesidad de condena surge después de la sentencia quedan exceptuados para que se proceda por el trámite de incidente.

### **Perención:**

La perención es una sanción a la demora en las actuaciones procesales, que responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica. Su objeto es dar por terminados los proce-



sos cuando una de las partes deja de realizar cualquier actuación durante el lapso de seis meses. Se declara por el juez a petición de parte.

Dada su utilidad como medio para descongestionar los juzgados de procesos, muchas veces el juez, sabiendo que el proceso está abandonado, debe mantenerlo en secretaría a la espera de la petición de parte para decretar la perención. Situación esta que no es lógica dentro de una sana administración de justicia, en la cual el juez debe oficiosamente disponer lo necesario para la continuación y finalización del proceso.

Por lo demás, muchos procesos terminan con arreglos extrajudiciales que generalmente no llegan a reflejarse en los expedientes, congestionando así los despachos y distorsionando el análisis del comportamiento de los mismos.

Es conveniente entonces, establecer la oficiosidad para dictar la perención del proceso, reducir el término para ella en la segunda instancia y establecer sanciones pecuniarias para el demandante inactivo.

Los proyectos de ley Nos. 16 y 17 desarrollan los aspectos anteriormente tratados y su texto es como sigue:

## **PROYECTO DE LEY No. 16**

Por la cual se modifican algunas disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

### **EL CONGRESO DE COLOMBIA**

#### **DECRETA**

**Artículo 1o.** — El artículo 123 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

**Artículo 123.** — HORA JUDICIAL. Cuando se fije determinada hora para un acto judicial, se entiende que debe iniciarse dentro de los primeros treinta minutos de esa hora, que se contarán a partir del momento en que el reloj la anuncia.

**Artículo 2o.** — El título del capítulo II, del Título 14 del Libro 2o. del Código Procedimiento Civil quedará así: "Liquidación de la Condena".

**Artículo 3o.** — El artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:



**Artículo 307. — CONDENA EN CONCRETO.** En ningún caso procede la condena in-genere.

Si al momento de dictar la providencia respectiva el juez no encuentra elementos que le permitan determinar la cuantía de la condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, dictará un auto para mejor proveer y procederá a decretar las pruebas que considere necesarias, para la estimación de los correspondientes valores.

Las partes, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto respectivo, podrán solicitar las pruebas que crean necesarias para dicha estimación, las cuales serán decretadas por el juez si proceden de acuerdo con este Código.

Las pruebas deberán practicarse dentro del término común de veinte (20) días.

**Artículo 40. —** El inciso primero del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso, el expediente permanezca en la Secretaría durante la primera instancia por seis meses, sin que el demandante promueva actuación alguna, el juez decretará la perención del proceso, de oficio o a solicitud del demandado. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia.

**Artículo 50. —** Adiciónase al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil el siguiente inciso:

Además de la condena en costas, el juez impondrá multa hasta de cien salarios mínimos mensuales a la parte demandante y a su apoderado, quienes responderán por su pago solidariamente.

**Artículo 50. —** El artículo 347 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

**Artículo 347. — PERENCION DE LA SEGUNDA INSTANCIA.** Con las excepciones indicadas en el inciso 50. del artículo precedente, el superior, de oficio o a solicitud del opositor declarará ejecutoriada la providencia apelada cuando, hallándose el negocio en la Secretaría, el recurrente omita toda actuación durante tres meses.

**Artículo 60. —** El numeral 10. del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

**“Artículo 392. —** Condena en costas. En todos los procesos se aplicarán las siguientes reglas en materia de costas:

1. La parte vencida en el proceso, o la que pierda el incidente o el recurso de apelación,



casación o revisión que haya propuesto, o la que dió lugar a la declaratoria de perención, o al desembargo de bienes en el proceso ejecutivo, será condenada al pago de costas en favor de la contraria, aunque no haya mediado solicitud. Sin embargo, la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías y los Municipios no serán condenados en costas.

**Artículo 7o.** — El artículo 401 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

**Artículo 401.** — RECONVENCION. Durante el término para contestar la demanda podrá el demandado proponer la reconvención contra uno o varios de los demandantes, siempre que sea de competencia del mismo Juez y pueda tramitarse por la vía ordinaria. Sin embargo, podrá reconvenirse sin consideración a la cuantía y al factor territorial.

La reconvención deberá reunir los requisitos de toda demanda y será admisible cuando de formularse en proceso separado procedería la acumulación. Vencido el término del traslado de la demanda principal a todos los demandados, el Juez resolverá sobre la admisión de la reconvención y aplicará el artículo 85. Si la admite, conferirá traslado de ella al reconvenido por el término establecido para la demanda principal, mediante auto que se notificará por estado, y si es el caso dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 21; en lo sucesivo ambas se sustanciarán conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia.

El traslado se hará constar en la lista a que se refiere el artículo 108, para los efectos indicados en el inciso primero de dicha disposición.

**Artículo 8o.** — Cuando en el Código de Procedimiento Civil se haga referencia a su artículo 308, el juez y las partes actuarán como se prescribe en el artículo 307 de dicho Código tal como ha quedado modificado por la presente ley.

Sin embargo, en los eventos previstos en los artículos 371, 430 numeral 2, 449 y 459 del mencionado código la liquidación se hará mediante el trámite de incidente, el cual deberá proponerse dentro de los ocho días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la ocurrencia del hecho, o al vencimiento del plazo, a que aquellas disposiciones se refieren.

El juez rechazará de plano el incidente que se proponga fuera del término indicado.

**Artículo 9o.** — La presente ley rige a partir de su publicación, deroga el inciso 2o. del artículo 335 y el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D.E.,



Por la cual se adiciona una norma del Código de Procedimiento Civil y se dicta otra disposición.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

**Artículo 1o.** — El artículo 77 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

**Artículo 77.** — ANEXOS DE LA DEMANDA. A la demanda debe acompañarse:

1. El poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado.
2. La prueba de la representación legal del demandante y del demandado, si se trata de personas naturales que no puedan comparecer por sí mismas.
3. La prueba de la existencia de las personas jurídicas que figuren como demandantes o demandados, excepto los municipios y las entidades públicas de creación constitucional o legal.
4. La prueba de la representación de las personas jurídicas que figuren como demandantes o demandados, salvo cuando se trate de la Nación, Departamentos, Municipios, Intendencias o Comisarías.
5. La prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad o albacea con que actúe el demandante o se cite al demandado.
6. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante.
7. Constancia sobre el pago del valor de la notificación.
8. Las demás pruebas que para el caso especial exija este Código.

**Artículo 2o.** — El Gobierno Nacional señalará el valor de la notificación y la entidad ante la cual se debe efectuar el correspondiente pago.

**Artículo 3o.** — La presente ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,



## Forma de las providencias judiciales:

El principio de la economía procesal debe reflejarse también en algunos aspectos de orden metodológico de las providencias dictadas en el proceso. En la mayoría de los casos, los autos y sentencias del juez y los conceptos del fiscal abundan en transcripciones de jurisprudencias, doctrinas, documentos, etc., que convierten los expedientes en aparentes tratados, o repeticiones inoficiosas cuando ese no es su objetivo.

Una correcta lógica jurídica en materia de decisión judicial debe referirse más al análisis de los hechos y a las normas jurídicas que le son aplicables y su conclusión (sentencia, auto, conceptos), evitando la reiterada reproducción de textos.

Consideramos apropiado regular esta materia prohibiendo esta equivocada práctica.

El proyecto de ley No. 18, que se transcribe, así lo preve.

### **PROYECTO DE LEY No. 18**

Por la cual se regula parcialmente la forma de las providencias judiciales.

## **EL CONGRESO DE COLOMBIA**

### **DECRETA**

**Artículo 1o.** — Salvo en las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en las providencias que se dicten en los procesos civiles, laborales, penales y administrativos no podrá hacerse transcripción alguna, total o parcial, de sentencias, conceptos fiscales, autos, alegaciones, testimonios, peritazgos y documentos públicos o privados, ni de libros de cualquier clase.

Las referencias que se considere necesario hacer acerca de todo lo anterior se limitarán a citar únicamente su ubicación dentro del respectivo texto, expediente o archivo, sin perjuicio de que el funcionario haga su evaluación o crítica, en su propio lenguaje, como fundamento de su providencia.

**Artículo 2o.** — La violación de lo dispuesto en el artículo anterior constituirá conducta contraria a la eficacia de la administración de justicia, para los efectos del régimen disciplinario previsto en el Decreto 250 de 1970 y normas que lo modifican o adicionan.



**Artículo 3o.** — La presente ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,

**Pruebas laborales:**

El estudio sobre la Justicia Laboral y Civil en Colombia, realizado por el Instituto SER de Investigación, además de las conversaciones con profesores y tratadistas, nos permitió detectar algunos de los problemas en materia de procesos laborales.

De acuerdo con las estadísticas, la duración promedio de los procesos laborales fue de 3.5 años, demora ésta ocasionada por la suspensión de audiencias que implica, por cada suspensión, una dilación de por lo menos 2 o 3 meses, porque la cantidad de audiencias en turno impide lograr una cita anterior.

La solución para evitar la inasistencia a las audiencias consiste en establecer una sanción mediante la cual, cuando el apoderado no comparezca a la audiencia, no se practique la prueba decretada y precluya la oportunidad para la misma.

El proyecto No. 19, dice:

**PROYECTO DE LEY No. 19**

Por la cual se modifica una norma del proceso laboral:

**EL CONGRESO DE COLOMBIA**

**DECRETA**

**Artículo 1o.** — El artículo 53 del Código de Procedimiento Laboral quedará así:

**Artículo 53.** — No se practicará la prueba que hubiere sido decretada, y precluirá la oportunidad para hacerlo, cuando el apoderado de la parte que la solicita no comparezca a la audiencia que para su evacuación se hubiere señalado y en cuanto su presencia fuere indispensable para la práctica de la probanza.

**Artículo 2o.** — La presente ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,



## Pago por consignación de acreencias laborales:

Uno de los casos típicos de indebida utilización de la jurisdicción laboral se encuentra en esta materia. En efecto, para cumplir con el aludido trámite, el patrono, cuando el trabajador se niega a recibir el valor de las prestaciones, debe acudir al Banco Popular o a la entidad que haga sus veces a depositar la suma mediante el lleno de un formulario en el que se debe indicar el juzgado a cuya orden se efectúe el depósito. El recibo correspondiente, acompañado del usual memorial, se lleva al juzgado laboral de reparto, quien debe cumplir formalmente una “apariencia de reparto”, para enviar la actuación al juzgado predesignado. Allí se radica y se dicta un auto de trámite.

El trabajador, a su vez, debe buscar el juzgado en donde esté el depósito y solicitar que se le entregue, por escrito; el juzgado debe elaborar dos oficios ordenando la entrega del dinero, los cuales recibe el trabajador junto con el título. Por último con títulos y oficios, el trabajador se dirige al Banco Popular para recibir el dinero.

Resulta inútil discurrir sobre lo injurídico de la actuación habida cuenta de que en la mayoría de los casos, los hechos acontecen en la forma narrada. Los casos en los cuales el trabajador no retira el dinero pudiendo dar origen a una contención no justifican recargar inútilmente en labores administrativas menores, la ya agobiante tarea de los jueces laborales.

Proponemos, en sustitución de lo anterior, variar el trámite centralizando el pago y recibo en el Banco Popular, sin participación judicial, salvo que, por rechazo del trabajador, pueda preverse una contención.

El proyecto de ley No. 20, expresa:

### **PROYECTO DE LEY No. 20**

Por la cual se dicta una disposición sobre pago por consignación en materia laboral.

## **EL CONGRESO DE COLOMBIA**

### **DECRETA:**

**Artículo 1o.** — En los lugares que el Gobierno señale, mediante decretos reglamentarios, los patronos que se hallen en los eventos previstos en el inciso segundo del artículo 65



del Código Sustantivo de Trabajo, podrán hacer el pago de lo que confiesen deber mediante consignación en un banco autorizado para recibir depósitos judiciales, dando aviso de ello al trabajador mediante escrito enviado por correo certificado. Este depósito producirá efectos de pago.

**Artículo 20.** — La presente ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E., a

### **Expropiación:**

Actualmente, el Código de Procedimiento Civil regula el Proceso de Expropiación en sus artículos 451 a 459. Por la naturaleza del asunto, la competencia es privativa del Juez Civil del Circuito, el cual recibe la demanda presentada siempre por una persona jurídica de derecho público contra el titular del derecho real sobre el mueble o inmueble, con base en un acto administrativo.

En este proceso el demandante no puede proponer excepciones perentorias ni previas, pero el juez puede pronunciarse sobre éstas últimas. Este carece de competencia por que ello se define en la vía gubernativa para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la decisión administrativa. El proceso de expropiación es realmente un proceso de cumplimiento de la Constitución. Busca establecer la indemnización de los titulares de derechos reales afectados por la decisión administrativa.

Conveniente sería en esta materia, unificar el proceso de expropiación con el que se lleva a cabo en la jurisdicción contencioso administrativa, de manera que, una vez discutido el fondo del asunto, el mismo juez de lo contencioso realice los pasos necesarios para establecer la indemnización correspondiente. Al ya estar formada la litis en el procedimiento administrativo, se lograría una gran economía procesal si el mismo juez conociera de la expropiación y desplazar de la jurisdicción ordinaria su función complementaria de señalar una indemnización. Consideramos entonces, que cuando se haya iniciado un proceso por ante la vía contencioso-administrativa, para decidir sobre un acto administrativo que ordene la expropiación, en ese mismo proceso se de la posibilidad al actor (demandante en el actual proceso de expropiación) para que solicite se tramite en el mismo proceso el señalamiento de la indemnización para el evento de que la pretensión principal no prospere.

El proyecto de ley No. 21, dice:



Por la cual se asigna la competencia para conocer del proceso de expropiación y se dictan algunas disposiciones sobre su procedimiento.

**EL CONGRESO DE COLOMBIA**

**DECRETA**

**Artículo 1o.** — A partir de la vigencia de la presente ley será competente para conocer de los procesos de expropiación que hayan de iniciar las entidades públicas, el Tribunal Contencioso Administrativo en cuya jurisdicción se halle ubicado el respectivo inmueble.

**Artículo 2o.** — El proceso de expropiación previsto en los artículos 451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil podrá iniciarse por la respectiva entidad pública, aunque se halle demandada la resolución que dispuso adelantar el correspondiente proceso. Pero, en tal caso, será competente para conocer del proceso de expropiación el mismo Tribunal en el que curse la acción contenciosa, acumulándolos, pero actuando en cuadernos separados.

El procedimiento, en lo relativo al proceso de expropiación, será el indicado en los ya citados artículos del Código de Procedimiento Civil, con las siguientes variaciones:

- a) Podrá decretarse el avalúo antes de la sentencia, si así lo pide la entidad pública y presta caución igual al ciento cincuenta por ciento (150%) del avalúo catastral del inmueble.
- b) La resolución sobre las circunstancias contempladas en los numerales 1, 3, 4, 5 y 7 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, deberá tomarse de oficio antes de la sentencia; pero si se hallare probada la prevista en el numeral 7 se procederá, también de oficio, a integrar el litisconsorcio necesario.

**Artículo 3o.** — El Tribunal Contencioso Administrativo dictará en primer término la sentencia que resuelva sobre la acción contenciosa y si tal providencia fuere contraria a las pretensiones del actor, podrá proferir de inmediato la sentencia que corresponda, según lo alegado y probado, respecto de la expropiación. Si la decisión sobre la acción contenciosa fuere afirmativa, se declarará improcedente la expropiación y se ordenará el archivo del expediente, sin perjuicio de los recursos legales.

**Artículo 4o.** — Los procesos de expropiación que se estén tramitando al iniciarse la vigencia de la presente ley, continuarán su curso ante el juez civil del circuito que esté conociendo de ellos o pasarán al conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo competente, según decisión de la entidad pública demandante.



**Artículo 5o.** — Esta ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,

### **Concordato:**

No puede negarse que la institución del concordato preventivo, tanto el judicial potestativo como el administrativo obligatorio, ha traído positivos beneficios para el comercio, pues ha permitido la continuidad de los negocios y evitado situaciones de falencia, en provecho de un factor de la economía nacional. Pero es necesario agilizar el trámite empezando por exigir que con la demanda se presenten proyectos de acuerdo con los acreedores; de otro lado conviene evitar la apelación del auto que acepta la solicitud de concordato y sancionar a quienes temerariamente formulen objeción a los créditos. En cuanto al concordato que se tramita ante el Superintendente de Sociedades, es de suma conveniencia evitar que se paralice el trámite mientras el juez decide sobre la objeción de créditos.

Con los criterios expuestos, se ha preparado el proyecto de ley No. 22, que dice:

## **PROYECTO DE LEY No. 22**

Por la cual se adicionan unas normas sobre concordato preventivo.

### **EL CONGRESO DE COLOMBIA**

#### **DECRETA**

**Artículo 1o.** — El artículo 1912 del Código de Comercio quedará así:

**Artículo 1.912.** — La solicitud deberá presentarse directamente por el deudor o por medio de apoderado ante el juez competente para conocer del juicio de quiebra del deudor, antes de la cesación en los pagos o dentro de los quince días siguientes a la fecha del sobreseimiento en los mismos.

Con la solicitud se presentará:

1. Un certificado de la Cámara de Comercio del lugar de su domicilio, en el cual deberá constar que el solicitante se halla legalmente inscrito en el registro mercantil.



2. Un balance general de su patrimonio, certificado por un contador legalmente habilitado para ello y acompañado de un inventario detallado de sus bienes y obligaciones, con indicación del nombre y domicilio de sus acreedores y de la clase de sus créditos, elaborado con no mas de un mes de anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud.
3. Una relación de todos los procesos en curso contra el deudor o promovidos por él.
4. Proyectos de acuerdo para su discusión con los acreedores.

Al presentar la solicitud, el deudor protestará bajo juramento que reúne las condiciones segunda, tercera, cuarta y quinta indicadas en el artículo 1.910.

**Artículo 2o.** — El artículo 1.913 del Código de Comercio quedará así:

**Artículo 1.913.** — Si la solicitud reúne los requisitos indicados en el artículo anterior, el juez la aceptará dentro de los tres días siguientes a su presentación y oficiará a los demás jueces competentes para conocer del juicio de quiebra, a fin de que no se de curso a dicho juicio o de que se suspenda, si ya se ha iniciado. Tales jueces, al recibo del oficio indicado, enviarán al juez de procedencia del mismo cualquier solicitud de quiebra o juicio de quiebra ya iniciado, en el estado en que se encuentre.

El auto que no acepte la solicitud será apelable en el efecto suspensivo; contra el que la acepte, no procederá recurso alguno.

**Artículo 3o.** — El artículo 1.919 del Código de Comercio quedará así:

**Artículo 1.919.** — Vencidos los términos de que disponen los acreedores para hacerse parte, el expediente se mantendrá por cinco días en la secretaría, durante los cuales cualquier interesado podrá objetar los créditos presentados.

Surtido este traslado y dentro de los diez días que precedan a la iniciación de las deliberaciones, el juez decidirá por auto sobre los créditos admisibles, con especificación de su naturaleza, estado, cuantía y prelación, para la aplicación de las reglas que se indican en los artículos siguientes.

**Parágrafo.** — Si en la formulación y trámite de las objeciones se dieren los eventos previstos en los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 74 del mismo Código, el juez impondrá al apoderado, además, multa cuyo valor oscilará entre uno y diez salarios mínimos mensuales.

**Artículo 4o.** — Sustitúyese el inciso tercero del artículo 1930 del Código de Comercio así:



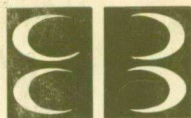
Por la formulación de objeciones no se suspenderá la actuación; pero los titulares de créditos objetados deberán prestar caución a satisfacción del Superintendente para asegurar que es cierta la existencia, la cuantía, la naturaleza, las garantías, los intereses y la orden de pago de sus créditos, según el caso, los cuales entonces se considerarán como si no hubieren sido objetados para efectos de representación, votación y decisiones. Si el juez resuelve en tal forma que implique modificación de lo acordado en el concordato, se hará efectiva la caución en favor del deudor para que su importe contribuya al cumplimiento de los acuerdos los que se adecuarán a la decisión judicial.

**Artículo 5o.** — Las providencias dictadas por la Superintendencia de Sociedades, en el concordato preventivo obligatorio, son de carácter administrativo y quedará cobijadas por el régimen establecido en el Código Contencioso-Administrativo.

**Artículo 6o.** — La presente ley rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.E.,





## CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

### ¡LIBROS CLAVES PARA ORIENTAR SU ACTIVIDAD!

- Nuevo Régimen de Arrendamientos \$ 1.800.00
- Sociedades Comerciales \$ 1.500.00
- Manual de Crédito Nacional 1986 \$ 1.000.00
- Bogotá 1984: Su realidad y su Situación Social y Económica \$ 1.000.00
- Nueva Selección de Doctrina Mercantil \$ 700.00

**Pedidos:**

**CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA**  
Cra. 9a. No. 16-21 - Tel.: 2819900 Ext.: 275